

36
287
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
ACATLAN

EXCUSAS ABSOLUTORIAS EN
LOS DELITOS COMETIDOS
CON MOTIVO DEL TRANSITO
DE VEHICULOS EN EL
ESTADO DE MEXICO

CARLOS CANO RUIZ

T E S I S

PRESENTADA PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1 9 9 3



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I

INDICE

	PAG.
PREFACIO	IV
INTRODUCCION	1

CAPITULO I

DELITO EN GENERAL

Antecedentes Históricos del Delito	4
Concepto de Delito	7
Concepto de Delito a través de nuestros códigos penales	8
Clasificación del Delito conforme a la Doctrina	9
Clasificación de los Delitos conforme a nuestra Legislación	21
Partes en el Proceso Penal	34
El Bien Jurídico Tutelado	42
Comentarios	45

CAPITULO II

TEORIA DEL DELITO

Teoría del Delito	47
Conducta	51
Tipicidad	58
Antijuricidad	60
Imputabilidad	63
Culpabilidad	66
Condiciones objetivas de Punibilidad	69
Punibilidad	70
Ausencia de conducta	73
Atipicidad y Ausencia dep Tipo	75
Causas de Justificación	76

II

PAG.

Inimputabilidad	78
Inculpabilidad	79
Falta de Condiciones Objetivas de Punibilidad	82
Excusas Absolutorias	83
Comentarios	84

CAPITULO III

DELITOS IMPRUDENCIALES QUE SE PUEDEN COMETER CON MOTIVO DEL TRANSITO DE VEHICULOS

Lesiones	87
Homicidio	98
Daño en Propiedad Ajena	107
Ataque a las Vías Generales de Comunicación	112
Abandono de Personas u Omisión de Auxilio	119
Comentarios	122

CAPITULO IV

LA AVERIGUACION PREVIA EN LOS DELITOS COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRANSITO DE VEHICULOS

Concepto del Ministerio Público	124
Averiguación Previa	127
La Denuncia	130
La Querrela	133
El Cuerpo del Delito	144
La Presunta Responsabilidad	148
De las Determinaciones del Ministerio Público	149
Comentarios	157

CAPITULO V

EXCUSAS ABSOLUTORIAS EN LOS DELITOS COMETIDOS CON MOTIVO
DEL TRANSITO DE VEHICULOS EN EL ESTADO DE MEXICO

Naturaleza Jurídica	162
Concepto	163
Clasificación	164
Excusas Absolutorias que reconoce la Legislación Penal para el Distrito Federal	165
Análisis de las Excusas Absolutorias en los Delitos cometidos con motivo del Tránsito de Vehículos en el Estado de México	171
Comentarios	183

CONCLUSIONES	184
--------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	187
--------------------	-----

IV

PREFACIO

Al concluir la presente Tesis, jamás he pretendido únicamente cumplir con la tarea de obtener un Título Profesional, sino al elegir el tema "Excusas Absolutorias en los Delitos cometidos con Motivo del Tránsito de Vehículos en el Estado de México", mi deseo ha sido contribuir a solucionar uno de los problemas de mayor auge tanto en el Estado Libre y Soberano de México como en el mundo entero.

Aunque seguro estoy que mi capacidad y mis conocimientos enriquecidos a lo largo de este trabajo de investigación, lejos están de lograr mi objetivo; encontrar soluciones que por su valor pudieran ser tomadas en consideración por quienes en sus manos tienen la solución de los problemas sociales.

Sin embargo siempre llevaré la conciencia tranquila de haber puesto todo mi empeño y mis conocimientos para concluir de la mejor manera la tarea encomendada a todo universitario que finaliza una carrera profesional.

La nostalgia y la emoción embargan mi persona, de tenerse por aprobada esta investigación de tesis, y culminar con ello una etapa de mi vida, para la que siempre se guarda un grato recuerdo. La vida del estudiante..., ese ir y venir de clases con los libros bajo el brazo, el recuerdo de

escuchar no sólo palabras, sino elocuentes cátedras en breves instantes, el desvelo y esa tensión por los exámenes, siempre con la ilusión de ser alguien en la vida, y no truncar las ilusiones de nuestros Viejos, todo parece haber terminado.

Quiero expresar mi más noble agradecimiento a todas aquellas personas que desinteresadamente me brindaron su apoyo para hacer posible la elaboración de este trabajo, y a quienes durante cinco años de mi carrera profesional supieron escuchar a un pupilo más en su generosa profesión de la enseñanza.

En especial deseo agradecer a los sobresalientes Licenciados en mi vida, Miguel González Martínez y R. Javier Calvillo Ramos, quienes con su consejo y orientación hicieron posible la realización de ésta Tesis. Así también a los Licenciados Eliseo y Rafael Flores Rojas, y al Lic. Miguel Pichardo, entre otros.

Sólo me resta poner a la consideración de los señores sinodales, el presente trabajo, de los cuales tengo fe de su favorable respuesta, al comparecer ante su superior conocimiento.

INTRODUCCION

Para el estudio de éste tema de tesis, es menester realizar un profundo análisis del ilícito penal en general, en seguida tratar los delitos de mayor frecuencia, ocasionados con motivo de tránsito de vehículos, a fin de poder estudiar la figura de las Excusas Absolutorias en dichos delitos, tomando como marco de referencia para tal análisis, la Legislación Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, para hacer patentes los beneficios que concede una Excusa Absolutoria propia de la Legislación Penal para el Estado Libre y Soberano de México, en cuanto a hechos de Tránsito se refiere.

Las Excusas Absolutorias son circunstancias donde a pesar de subsistir la antijuridicidad y la culpabilidad, queda excluida desde el primer momento la posibilidad de imponer pena alguna al autor del delito. La no aplicación de la pena obedece principalmente a una causa de utilidad pública.

Lo anterior puede funcionar como una medida para erradicar el excesivo trabajo en los tribunales, y una constante sobrepoblación en los reclusorios y penitenciarias.

Porque si bien es cierto que con la penalización de diversas conductas se pretende prevenir lo considerado como delito,

sin embargo no siempre ofrece buenos y satisfactorios resultados, en virtud de que el delincuente regularmente no se detiene a contemplar la pena con la cual se sanciona la conducta antijurídica próxima a ejecutar, pues en caso contrario con seguridad que desistía de realizar dicho comportamiento.

Por ello el Legislador debe considerar otras figuras para las Excusas Absolutorias, principalmente en los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, de conformidad con una prudente Política Criminal y por razones de justicia y equidad, despenalizando ciertas y muy especiales conductas que encierran una causa de utilidad pública.

Con ello se cree, se estará garantizando un verdadero Estado de Derecho, dando a la sociedad una amplia seguridad jurídica, cumpliendo así el Estado con su cometido, que el hombre mismo en uso de su soberanía ha delegado en éste para salvaguardar sus bienes.

Lo anterior en virtud de la importancia actual del tránsito de vehículos, que se hace patente día con día con lo numeroso de éste aunado al sin número de delitos de tránsito que con los mismos se ocasionan tanto en la Ciudad de México como en otras grandes urbes.

Toda vez que el hombre en su esmerado afán hacia la

modernidad, se vale de aparatos mecánicos que facilitan sus actividades abreviándole tiempo y esfuerzo, aunque esos instrumentos encierran un doble aspecto, pues, mientras por un lado le ayudan en gran medida, por el otro han venido a crear un monstruo que acaba con los valores humanos y patrimoniales de los individuos que viven en una sociedad.

Anteriormente los automóviles representaban un lujo, pero hoy en día más que un lujo se ha convertido en un instrumento de trabajo traducido en una necesidad vigente y así transportarse rápidamente hacia las fuentes de empleo, cada vez más lejanas, sin escapar los días de paseo, por lo que hoy en día el automóvil forma parte de una sociedad con todo y sus consecuencias que el uso de éstos traen consigo.

CAPITULO I

DELITO EN GENERAL

Si nos remontamos a las fuentes históricas del Derecho Romano, el delito tiene su antecedente en lo que estuvo estrechamente vinculado con el resultado dañoso que producía.

De esta forma en un principio se indicó con la expresión "Noxia o Noxa", cuyo significado equivale al daño o perjuicio causado, no siendo muy propia la función de la Noxia dentro del Derecho Romano, en virtud de que su sentido estaba encaminado más bien a los efectos derivados de la reparación y retribución del daño causado, no destacando el reproche en los elementos subjetivos y sólo se contemplaba el resultado lesivo.

Posteriormente se le identificó con el vocablo "Delictum", cuya locución resulta más acorde incluso con la actualidad, toda vez que expresa con más precisión lo que se considera como delito.

El significado corriente del vocablo Delictum, se traduce como desviarse, cometer una falta, resbalar, tropezar. En el Derecho Romano, se utilizó para señalar la acción delictiva. La acción que infringe la obligación ética, asumida por la ley del Estado, por ende la objetividad y el sentido del vocablo Delictum desde sus orígenes resulta sumamente claro para ejemplificar una conducta antijurídica.

Expone el maestro Fernando Castellanos "la palabra delito deriva del verbo latino Delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley" (1).

De lo anterior, se desprende que el delito es equivalente a lo antijurídico, esto es, lo será toda conducta contraria al Derecho y sancionada por la ley.

Hoy en día y en lengua castellana, se emplea la expresión delito, sin ser ajeno a nuestro lenguaje las frases de infracción penal, acción punible, conducta delictiva, ilícito penal, hecho punible, etc.

En una exhaustiva búsqueda por encontrar un concepto propio del delito, se tiene que a la fecha han sido elaborados infinidad de conceptos al respecto, formándose así varias Escuelas que estudian el delito, surgiendo también diversos puntos de vista al respecto, siendo tan fructífera que actualmente encontramos conceptos de carácter filosófico, jurídico, formalista, dogmático, entre otros, notándose que todos los tratadistas persiguen un punto en común, esto es, crear un concepto universal y para todos los tiempos.

(1) Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. p. 125.

Al respecto el jurista Cuello Calón expone "las tentativas de formular una noción del delito en sí, han sido estériles, pues hallándose la noción del delito, en íntima conexión con la vida social, jurídica de cada pueblo y cada siglo, aquella ha de seguir forzosamente los cambios de éstos, por consiguiente es muy posible que lo penado ayer como delito, se considere hoy como lícito" (2).

Como referencia de lo anterior, recuérdese cuando en Europa hasta las proximidades del siglo XIX se encendieron hogueras para quemar a las brujas, por considerar la hechicería como el delito más trascendental. La valoración jurídica de aquellos tiempos así lo consideró y por ello, infelices mujeres, algunas de ellas enfermas de la mente pagaron en la hoguera sus excentricidades en el holocausto a la valoración de la época.

Coincide con lo anterior, el tratadista Carranca y Trujillo al indicar "estériles esfuerzos se han desplegado para elaborar una noción filosófica del delito independiente del tiempo. La ineficacia de tal empresa se comprende con la sola consideración de que el delito tiene sus raíces hundidas en las realidades sociales y humanas que cambian según los

(2) Cuello Calón, Eugenio. Derecho Penal. p. 254:

pueblos y épocas con la consiguiente mutación moral y jurídica-política" (3).

CONCEPTO DE DELITO

Expone el maestro de Pisa, Francisco Carrara "el delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto extremo del hombre positivo o negativo imputable y políticamente dañoso" (4).

Para Jiménez de Asúa "el delito es el acto típicamente antijurídico y culpable sometido a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal" (5).

Cuello Calón señala "el delito es la acción antijurídica, típica, culpable y sancionada por una ley penal" (6).

Mientras el distinguido maestro Castellanos Tena, sin señalarlo expresamente considera el delito como una conducta típica, antijurídica y culpable.

De las definiciones anotadas, se desprende como

(3) Carranca y Trujillo, Eugenio. Derecho Penal Mexicano, Parte General. p. 220.

(4) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. 113.

(5) Jiménez de Asúa, Luis. La Ley y el Delito. p. 207.

(6) Cuello Calón, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. p.257.

característica común en todas ellas, que los requisitos del ilícito penal lo componen cuatro elementos que son: la conducta, tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad.

CONCEPTO DE DELITO A TRAVES DE NUESTROS CODIGOS PENALES

En el año de 1871 se creó el Código Penal que debía regir en el Distrito Federal, compuesto por 1151 artículos, correspondiendo al estudio del desarrollo del acto delictivo; así en su artículo cuarto contenía el concepto siguiente "delito es la infracción voluntaria de una ley penal haciendo lo que ella prohíbe o dejando de hacer lo que manda" (7).

Posteriormente en el año de 1929, se creó un nuevo Código Penal, este moderno Ordenamiento modifica el anterior concepto y lo describe en su artículo 110. "delito es la lesión de un derecho protegido legalmente por una sanción penal" (8).

Del concepto dado por el Código de 1929, es menester señalar que resulta incompleta, toda vez que no describe el delito dentro del marco de las acciones humanas, y no comprende a los delitos de peligro, toda vez que existen delitos que no atacan derechos, sino bienes que estos protegen.

(7) González de la Vega, Francisco. Código Penal Comentado. p. 54.

(8) Ibidem.

A la fecha el Código Penal que rige en el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, por decreto del 02 de enero de 1931, en su artículo 7o. describe "delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales".

De conformidad con el sistema positivo mexicano, una conducta es delictiva cuando está sancionada por las leyes penales. Empero creo que esta definición resulta incompleta, toda vez que el mismo ordenamiento establece delitos no punibles, y estos se dan cuando se presentan las denominadas excusas absolutorias, en las cuales la calificación delictuosa permanece y la pena no se aplica.

Sin embargo debe entenderse al delito con base a su definición legal como la conducta positiva o negativa sancionada por las leyes penales, expedidas con el objeto de proteger los bienes jurídicos del individuo y de la sociedad.

CLASIFICACION DEL DELITO CONFORME A LA DOCTRINA

Existen diversas formas de clasificar al delito, la misma doctrina se ha encargado de dividirlo en grupos. Por su parte los Códigos Penales de cada Estado clasifican al delito en distintos ordenes, reuniéndolos en Libros que se dividen en Títulos que a su vez se componen por Capítulos.

La clasificación más completa está dada por la doctrina, de

la cual el Código Penal de 1931 se adhiere al punto cinco de ésta.

1. POR LA CONDUCTA DEL ACTIVO

A. DELITO DE ACCION.- Para que exista un delito, es necesaria la realización de una conducta humana, y ésta consiste en el movimiento corporal humano productor de un resultado como efecto, siendo ese resultado un cambio o un peligro en el mundo exterior.

Por lo tanto los delitos de acción serán cometidos mediante la ejecución de una actividad positiva y con esta se viola una norma prohibitiva. Esto es, se hace lo prohibido por la ley.

B. DELITO DE OMISION.- Tomando en cuenta que la omisión se refiere al no hacer o abstenerse de actuar, y equivale a una actividad pasiva, éste se configura ante la falta de una actividad jurídicamente ordenada y con tal ausencia o abstención se viola una ley positiva. En este supuesto se deja de hacer lo que manda la ley.

a) DELITOS DE SIMPLE OMISION.- Consisten en un no hacer voluntario o involuntario (culpa), violando con ello una norma preceptiva y produciendo un resultado típico, ejemplo la omisión de brindar auxilio.

b) DELITOS DE COMISION POR OMISION.- Son aquellos en los que el sujeto decide no actuar y por esa inacción se produce un resultado dañoso. Por decir algo aquél quien tiene a su cuidado a un enfermo y decide ya no suministrarle los medicamentos prescritos con el objeto de causarle la muerte.

Quedando entonces que en los delitos de simple omisión hay una violación jurídica y un resultado puramente formal, transgrediéndose una norma dispositiva, mientras en los delitos de comisión por omisión además de la violación de la norma jurídica, se produce un resultado material infringiéndose una norma dispositiva y una prohibitiva.

2. POR SU RESULTADO.

A. DELITOS FORMALES.- Igualmente llamados de simple actividad o de simple acción, en oposición a los materiales en los que si se da un resultado lesivo. En estos el tipo se agota con la sola acción u omisión del sujeto activo, sin que sea menester para su consumación la consecuencia de un resultado que altere al mundo exterior, sancionándose en estos ilícitos dicha acción u omisión, por ejemplo los delitos de amenazas y portación de armas de fuego.

Explica Castellanos Tena "son aquellos en los que se agota el tipo penal en el movimiento corporal o en la omisión del agente, no siendo necesario para su integración de un

resultado externo, son delitos de mero peligro abstracto y se sanciona la acción u omisión en sí mismo" (9).

B. DELITOS MATERIALES.- Son aquellos que sí requieren para su configuración, de un cambio o mutación en el mundo exterior, esto es un resultado objetivo y apreciable por los sentidos.

"Hay delitos de los cuales lo trascendente en el campo del Derecho, es que exista un resultado material o una mutación en el mundo externo y los resultados de una conducta humana típicamente relevante, son de diversa naturaleza, de acuerdo con la infinita variedad del mundo exterior, pueden ser física, esto es consistir en la mutación de la forma o sustancia de las cosas... fisiológicas, si consisten en la producción de una determinada situación patológica que puede originar el fin de la vida..., anatómica, cuando consisten en la pérdida de algunos de los miembros que forman la integridad del cuerpo humano..., psicológicas, si producen algunas psicosis o psicopatías". (10)

(9) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 137.

(10) Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo I. p. 168-169.

3. POR EL DAÑO QUE CAUSAN

A. DELITOS DE LESION.- Son aquellos que ocasionan un daño real y directo a los bienes jurídicamente tutelados, de ellos tenemos las lesiones, el homicidio, el estupro y otros.

B. DELITOS DE PELIGRO.- Estos ilícitos únicamente ponen en riesgo la posibilidad de producirse un daño al bien jurídico protegido por la norma, ejemplo de éstos encontramos al conducir en estado de ebriedad, tipificado en el artículo 200 del Código Penal para el Estado de México; el abandono de personas y el disparo de armas de fuego entre otros.

4. POR SU DURACION

A. DELITOS INSTANTANEOS.- Son aquellos en donde la acción que los verifica se perfecciona en un solo momento; para determinar si un delito es instantáneo se debe enfocar la instantaneidad a la consumación, así el delito instantáneo es aquél que tan pronto se produce, la consumación se agota, ejemplo el homicidio, nótese como en este delito se destruye automáticamente el bien jurídico tutelado, que es la vida.

B. DELITOS INSTANTANEOS CON EFECTOS PERMANENTES.- Se caracterizan porque el bien jurídico tutelado se lesiona o disminuye en forma instantánea por los efectos causados por

la lesión y se prolonga en cierto tiempo permaneciendo sus consecuencias, ejemplo todo tipo de lesiones.

C. DELITOS CONTINUADOS.- Son aquellos en donde varias acciones provocan un sólo resultado antijurídico, habiendo continuidad en la conciencia del sujeto, pero discontinuidad en la ejecución.

Estos delitos se presentan cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas se viola un mismo precepto legal, encontrando entonces varios actos de la misma naturaleza que si se consideran independientemente pueden configurar un delito ligado por una conexión temporal y encaminada a la realización de un propósito, violando una norma de tipo penal.

D. DELITOS PERMANENTES.- En estos ilícitos la acción que consume el delito puede prolongarse en el tiempo a voluntad del sujeto activo, esto es, en el momento se integra la figura típica, pues se lesiona el bien jurídico tutelado, citaré como ejemplos el rapto y la privación ilegal de la libertad.

Al respecto señala Sebastián Soler "puede hablarse de delito permanente sólo cuando la acción delictiva misma permite por sus características, que se le pueda prolongar voluntariamente en el tiempo, de modo que sea idénticamente

violatorio del Derecho en cada uno de sus momentos". (11)

De conformidad con la clasificación anterior, algunos de los delitos motivados por el tránsito de vehículos corresponden a las categorías de los delitos instantáneos, en virtud de que su consumación se perfecciona en un sólo momento, pero también corresponde a los delitos instantáneos con efectos permanentes, puesto que además de integrarse instantáneamente, permanecen sus consecuencias nocivas.

5. POR EL ELEMENTO SUBJETIVO O CULPABILIDAD

A. DELITOS DOLOSOS O INTENCIONALES.- Son aquellos en donde la voluntad consciente se dirige a la realización de un hecho típico y antijurídico.

En este orden diríamos que la conducta dolosa aparece cuando se produce un resultado típicamente antijurídico a sabiendas de que se quebrante el orden jurídico es con voluntad de realizar una acción y con la representación del resultado delictivo que se quiere.

B. DELITOS CULPOSOS O IMPRUDENCIALES.- Estos ilícitos se configuran cuando el sujeto activo no desea un resultado

(11) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 139.

delictivo, más éste acontece por un actuar o falta de atención, una ausencia de cuidado o por mera distracción.

Obrando imprudencialmente el que realiza un hecho típico incumpliendo un deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales imponen a las personas. En este rubro se enumeran todos los delitos causados con motivo del tránsito de vehículos que más adelante analizaremos.

C. DELITOS PRETERINTENCIONALES.- Surgen cuando el resultado va más allá de lo deseado, por el sujeto activo, esto es el desenlace rebasa la intención original.

6. POR SU ESTRUCTURA

A. DELITOS SIMPLES.- Son aquellos en los cuales la lesión jurídica no existe más que en un bien jurídico protegido, y es violado para su consumación. Ejemplo el homicidio.

B. DELITOS COMPLEJOS.- Son aquellos en los cuales la figura jurídica consta de la unificación de dos infracciones, cuya fusión da origen a una figura superior en gravedad que a las que la componen aisladamente. Ejemplo robo en casa habitación.

En estos ilícitos es menester diferenciar al delito complejo del concurso de delitos "no es lo mismo delito complejo que el concurso de delitos, en el primero la misma ley crea el compuesto de delito único, pero en el tipo intervienen dos o

más delitos que pueden configurarse por separado, en cambio en el concurso las infracciones no existen como una sola, sino separadamente, pero es el mismo sujeto quien las ejecuta".

Respecto a los delitos a estudiar cometidos con motivo del tránsito de vehículos, considero se trata de delitos simples, sin descartar la posibilidad del concurso de delitos, ejemplo el homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, todos éstos cometidos por un mismo sujeto y con una misma conducta.

7. POR EL NUMERO DE ACTOS QUE LO INTEGRAN

A. DELITOS UNISUBSISTENTES.- Presentan como característica principal estar integrados por un sólo acto, ejemplo el homicidio.

B. DELITOS PLURISUBSISTENTES.- Son aquellos que se componen en su descripción típica de varios actos, de ellos se tiene y hablando de tránsito de vehículos al delito contenido en el artículo 171 del Código Penal vigente para el Distrito Federal en su fracción I "Al que viole dos o más veces los Reglamentos o disposiciones sobre el tránsito o circulación de un vehículo, en lo que se refiere a exceso de velocidad".

8. POR EL NUMERO DE SUJETOS QUE INTERVIENEN

A. DELITOS UNISUBJETIVOS.- Como su significado lo dice en estos ilícitos únicamente interviene un sujeto en la ejecución de la conducta delictiva descrita por la ley. Pero es posible la realización de la conducta antijurídica por dos o más personas, dando lugar a los diversos tipos de participación.

B. DELITOS PLURISUBJETIVOS.- Son aquellos en los cuales la figura delictiva requiere de la intervención de dos o más conductas para efecto de integrar el tipo penal, ejemplo en el delito de asociación delictuosa.

9. POR LA FORMA DE PERSECUCION

Serán de querella y de oficio, siendo menester atender esta clasificación incluso para hacer del conocimiento de la autoridad los delitos.

A. DELITOS DE QUERELLA.- También se les conoce como de querella necesaria, son aquellos que para su persecución se necesita que el sujeto pasivo u ofendido, titular de un derecho agraviado, o de su legítimo representante haga del conocimiento del Agente del Ministerio Público aunado con el deseo de que se persiga y castiguen los hechos cometidos en sus bienes o en su persona, ejemplo las lesiones que no ponen

en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, contenidas en el artículo 289 del Código Penal para el Distrito Federal.

B. DELITOS DE OFICIO.- Son aquellos en los cuales se debe iniciar la respectiva Averiguación Previa y continuar el procedimiento, en caso de ejercitarse Acción Penal sin la decisión de un particular ante el conocimiento de un delito. Presentan la desventaja a diferencia de los delitos por querrela necesaria de no extinguir la Acción Penal con el perdón del ofendido.

Los delitos de oficio serán "aquellos en los que la autoridad, previa denuncia esta obligada a actuar, por mandato legal, persiguiendo y castigando a los responsables, con independencia de la voluntad de los ofendidos consecuentemente, en los delitos perseguibles de oficio, no surte efecto el perdón del ofendido, a la inversa de lo que ocurre en los delitos de querrela necesaria". (12)

Sin embargo en cuanto al tratamiento del Estado de México para los delitos causados con motivo del tránsito de vehículos, y para efectos de la devolución de un automóvil inmiscuido es requisito indispensable que el ofendido o

(12) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 144.

lesionado externe expresamente el perdón al presunto responsable, aún tratándose de delitos perseguibles de oficio, en caso contrario el sujeto activo deberá depositar garantía suficiente para el pago de la reparación del daño por la lesión causada.

10. POR SU MATERIA

A. DELITOS DEL FUERO COMUN.- Son aquellos en donde se afectan los intereses entre particulares (persona física vs persona física), evidentemente en estos ilícitos no se afectan los intereses de la Nación.

B. DELITOS DEL FUERO FEDERAL.- Son aquellos en los que se ven afectados los intereses de la Federación, esto implica hablar de un acontecimiento en donde intervengan un sujeto particular y los bienes de la Nación o viceversa, ejemplo: un sujeto conduciendo su vehículo y por un descuido su automóvil se proyecta en contra de algún poste de teléfono o del alumbrado público, ahí se estarán dañando los intereses de la Federación, por tanto no será competencia de los juzgados de Fuero Común, para conocer del caso, aunque por lo regular en los delitos causados en este orden las averiguaciones previas correspondientes son iniciadas por los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común y turnadas por incompetencia al Ministerio Público Federal, y para efectos del procedimiento conocerán los juzgados de Distrito.

C. DELITOS DEL FUERO MILITAR.- Son aquellos que atentan en contra del orden militar violando una norma del Código Penal Militar. Desde luego es propio de los miembros del Ejército y Fuerza Armada Mexicana. Y cuando un particular comete un delito en agravio de los bienes o intereses de dichas instituciones será juzgado por los tribunales del Fuero Federal de conformidad con el artículo 13 constitucional.

D. DELITOS OFICIALES.- Son aquellos que están previstos y sancionados en la Ley para los Servidores Públicos.

E. DELITOS POLITICOS.- Son aquellos que atentan contra el orden Institucional y Constitucional del Estado Mexicano.

Por último hace alusión la misma doctrina a una onceava clasificación y ésta es la que hacen cada uno de los Códigos Penales de la República Mexicana, en los cuales al igual que el Distrito Federal tipifican los delitos de un ordenamiento positivo.

CLASIFICACION DE LOS DELITOS CONFORME A NUESTRA LEGISLACION

De conformidad con el Código Penal de 1931, vigente en el Distrito Federal aplicable en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, se desprende de su artículo 8o. que los delitos podrán ser:

- I. Intencionales,
- II. No intencionales o de imprudencia, y
- III. Preterintencionales.

Recuérdese que la culpabilidad puede manifestarse en dos formas que son en dolo y en culpa, aunque autores de alto renombre consideran una tercera forma que es la preterintención, cuando el resultado obtenido sobrepasa al deseado por el agente activo del delito.

I. DELITOS INTENCIONALES O DOLOSOS

Tomando en cuenta que el dolo se mueve siempre en la esfera mas amplia de la culpabilidad en general, en virtud de que el dolo se traduce en la voluntad determinante de la conducta valorada normativamente como delito.

Atendiendo el ánimo delictivo del agente, el contenido del dolo es la reprochabilidad por querer el hecho prohibido por la norma, la responsabilidad por los hechos queridos, por la voluntad deseada y encaminada por el sujeto activo. Así el saber y querer unidos a una obra son supuestos comunes que condicionan al juicio de reproche.

Por eso la voluntad o el querer es el común denominador de toda conducta dolosa, resultando así la voluntad como conducta Sine quan non de la acción delictuosa.

Sostiene Castellanos Tena, que el dolo "consiste en el actuar voluntario, dirigido a la producción de un resultado típico y antijurídico" (13).

Por su parte Raúl Carrancá y Trujillo expone "el dolo puede ser considerado en su noción más general como la intención y ésta definición ha de ser delinquir, o sea estar dañado. Sobre ser voluntaria la intención para reputarsele doloso, obrará pues con dañada intención aquél quien en su conciencia haya admitido causar un resultado ilícito, representándose las circunstancias y la significación de la acción" (14).

Concluyendo el dolo es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que la ley prevé como delito.

Respecto del dolo, se han hecho varias clasificaciones de conformidad con cada autor, en virtud de que todo tratadista tiene su apreciación conforme a la configuración de la actitud dolosa del sujeto, en cuanto a los alcances del resultado, la dirección e intensidad, inclusive algunas concepciones han tomado estabilidad en la doctrina, en lo que se refiere a cubrir el gran abismo que media entre el dolo y la culpa como grado de intención.

(13) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 223.

(14) Carrancá y Trujillo, Raúl. op. cit. p. 248.

Para un mejor estudio observemos las siguientes especies:

A. DOLO DIRECTO.- Existe esta especie de dolo cuando el agente ha previsto como seguro y ha querido directamente el resultado de su acción u omisión. Coincidiendo el resultado con el propósito del agente. En donde el sujeto activo quiere un resultado y su conducta está encaminada a conseguirlo concordando el propósito con el resultado final.

B. DOLO INDIRECTO.- De acuerdo con el jurista Villalobos "existe dolo indirecto cuando el agente se propone un fin y comprende o sabe que por el acto que realiza para lograrlo se han de producir otros resultados antijurídicos que no son el objetivo de su voluntad, pero cuyo seguro acontecimiento no le hace retroceder, por lo cual quedan admitidos por él, con tal de lograr el propósito rector de su conducta" (15).

C. DOLO INDETERMINADO.- Existe con la inatención genérica de delinquir, sin proponerse un resultado delictivo sobre alguien en especial, pero sí apreciando sus consecuencias, tal es el caso del terrorista que sin fijarse el propósito de matar a una persona determinada lanza una bomba, dando muerte a varios de los sujetos congregados en un recinto.

(15) Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. p. 293.

II. DELITOS NO INTENCIONALES O DE IMPRUDENCIA

Es menester saber que la raíz de la culpa descansa en el error no excusable, esto es en la conducta viciada por falta de cuidado normal que el Derecho y la convivencia exigen, en una sociedad.

Pero veamos las polémicas acerca de la culpa, respecto de su naturaleza, para dar fundamento a lo expuesto por Jiménez de Asúa quien señala "así como la figura técnica del dolo, nadie le discute como entidad punible, la culpa en cambio es uno de los temas más debatidos en el derecho penal".

El ordenamiento penal de 1931 vigente en el Distrito Federal, al referirse a los delitos no intencionales o de imprudencia, agrega "obra imprudencialmente el que realiza el hecho típico incumpliendo un deber de cuidado, que las circunstancias y condiciones personales le imponen".

La base subjetiva sobre la que la culpa ha de descansar es la tradicional noción de la previsibilidad, principio fundamental aceptado por una basta literatura, sostenida por tratadistas de renombre, es así como señala Jiménez de Asúa "la culpa es la producción de un resultado típicamente antijurídico, por falta de previsión del deber de conocer no sólo cuando ha faltado al autor la representación del resultado que sobrevendrá, sino también cuando la esperanza de que no sobrevenga ha sido fundamentado decisivo de las

actividades del autor que producen sin querer resultado antijurídico y ratificación del mismo" (16).

Pavón Vasconcelos define la culpa "como aquel resultado, previsto o previsible derivado de una acción u omisión voluntaria y evitable, si se hubieran observado los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico y aconsejable por los usos y costumbres" (17).

Mientras Francisco Carrara señala "la culpa se define como la omisión de diligencia en calcular las consecuencias previsibles, por eso la esencia de la culpa está toda en la previsibilidad" (18).

NATURALEZA JURIDICA DE LA CULPA

Para examinar la naturaleza jurídica de la culpa, se han elaborado diversas teorías, de las mas sobresalientes encontramos:

a) TEORIA DE LA PREVISIBILIDAD.- Expuesta por Francisco Carrara para él, la esencia de la culpa radica en la previsibilidad del resultado no querido, por ello se puede

(16) Jiménez de Asúa, Luis. op. cit. p. 408.

(17) Pavón Vasconcelos, Francisco. Manual de Derecho Penal Mexicano. p. 371.

(18) Carrara, Francisco. Programa de Derecho Criminal. p.124.

decir que se funda en un vicio de la inteligencia el que en última instancia, no es sino un vicio de la voluntad.

b) TEORIA DE LA PREVISIBILIDAD Y EVITABILIDAD.- Sostenida por Binding, él cual considera y acepta la previsibilidad del evento, pero agrega el carácter de evitable o prevenible para integrar la culpa, de tal manera que no ha lugar al juicio de reproche cuando el resultado siendo previsible es inevitable.

c) TEORIA DEL DEFECTO DE ATENCION.- Defendida por Angliolini, este tratadista hace descansar la esencia de la culpa en la violación por parte del sujeto, de un deber de atención impuesto por la ley.

Por mi parte considero que actuará culposamente quien infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado pudo prever.

La culpa se representa como la configuración no deseada del tipo penal, sin embargo al igual que en los delitos dolosos, aparece un daño o menoscabo al bien jurídico tutelado.

Aunque en los delitos dolosos la conducta del sujeto activo está directamente encaminada a la producción de un resultado dañoso, mientras en los delitos culposos el daño no ha sido deseado en ningún momento por su autor, sólo que deberá de responder por su conducta antijurídica al encontrarse en el supuesto que el ordenamiento penal determina como delito, aún

cuando medie la existencia de su imprudencia o falta de cuidado, al no prevenir los posibles resultados.

Por ello la previsibilidad ha de tomarse como una situación anímica ante la cual el Derecho responsabiliza por las consecuencias del acto realizado. Por lo que es suficiente realizar la acción antijurídica para que se responda por el resultado, que nunca entró en el campo volitivo del sujeto.

En este orden la imprudencia se refiere a obrar irreflexivamente, sin precaución, sin cautela, siendo lo contrario a prudencia, entonces se traduce como un descuido de lo que debe realizarse con toda la cautela del mundo, y si no se atiende de esta manera se tratará entonces de una omisión de la atención y diligencia debidas, aunque ambas representan el carácter común de la falta de previsibilidad.

CLASES DE CULPA

Así como se han elaborado diversas clasificaciones del dolo, para su mejor estudio, también las hay acerca de la culpa, de esta manera destacados autores exponen la siguiente clasificación:

a) CULPA CONSCIENTE O CON PREVISION Se presenta cuando el sujeto activo del delito, ha previsto el resultado típico como posible pero no solamente no lo quiere sino

abriga, la esperanza de que no ocurra dicho resultado, ya sea por la suerte o por el propio poder de evitación, traducido en pericia o destreza. Esto es cuando el común de la gente es capaz de prever de representarse un posible resultado, mismo que no se quiere, sin embargo acontece.

Podemos diferenciar claramente la culpa consciente del dolo eventual, aunque guardan gran semejanza. Sin embargo refiriéndonos a éste último, nótese como al sujeto activo le es indiferente el resultado que puede producir con su conducta antijurídica menospreciando el orden jurídico, así como los bienes jurídicamente tutelados por el mismo cuerpo de leyes, habiendo siempre previsión del resultado punible, en cambio en la culpa que estudiamos se prevén las consecuencias del hecho antijurídico, pero no se menosprecia el bien jurídico protegido, no siéndole indiferente la vulneración de uno de estos bienes, sino que tiene la esperanza de que no se produzca, tratando desde luego conducirse con el cuidado necesario.

b) CULPA INCONSCIENTE O SIN PREVISION Surge cuando el agente no prevé en su conducta el resultado porque exista en él un olvido de la ley y de los valores que representa, pero nunca un menosprecio a dichos bienes jurídicos protegidos.

La culpa inconsciente se trata de, una conducta en donde no se prevé lo previsible y evitable, teniendo el sujeto activo la obligación de prevenirlo en virtud de ser de naturaleza

previsible y a su vez se puede evitar, sin embargo se produce una conducta típica y antijurídica penalmente tipificada.

Se considera la especie de culpa inconsciente como la forma más benigna de la culpa, en virtud de que aquí se trata de un actuar de manera negligente, esto es sin la atención suficiente para causar un daño, encontrando que el sujeto actúa en vista de la acción en sí sin la menor preocupación por los resultados que no entran en el campo de su querer.

Al respecto Cuello Calón, citando al jurista Anglioni, presenta una clasificación de las categorías de delincuentes culposos:

I. Delincuentes por carencia de sentido moral y altruismo.- En quienes la causa del hecho fue consciente y el efecto previsto.

II. Delincuentes por inexperiencia, ineptitud, ignorancia.- En los que es consciente la causa inmediata y violan especiales deberes sociales, como ejemplo tenemos a los automovilistas inexpertos y carentes en la destreza de conducir un vehículo de motor, por ende culpables de su proceder.

III. Delincuentes por influjo del ambiente, por un exceso de trabajo físico o intelectual y en los que es inconsciente la causa inmediata, por ejemplo el chofer de un autobús donde sus patrones lo obligan a laborar por largas jornadas sin

descanso a cambio de un mayor salario y en consecuencia provoca un hecho de tránsito.

IV. Desde el punto de vista de la peligrosidad del acto involuntario realizado.- El mismo autor propone el castigo de aquellos actos de los que deriven hechos penados por la ley como delitos y para el castigo bastaría que el acto fuese peligroso, independientemente de sus consecuencias.

DELITOS PRETERINTENCIONALES

En principio el delito es preterintencional "cuando el resultado sobrepasá a la intención; si el agente proponiéndose golpear a otro sujeto, lo hace caer debido al empleo de la violencia y se produce la muerte, sólo hubo dolo respecto a los golpes, pero no se quiso el resultado letal" (19).

El maestro Jiménez de Asúa citando a Marciano, se refiere al homicidio preterintencional al decir "importa señalar que sin ánimo de matar no hay homicidio, pero si éste se causa con medios que racionalmente ocasionan la muerte, como la espada (gladius), entonces deberá aceptarse indubitavelmente el

(19) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 141.

ánimo de matar, entre otros casos en que el ánimo no existe, aparece el típico homicidio preterintencional".

Expresa Porte Petit "en el delito preterintencional existe dolo con relación al resultado producido, en otros términos hay un nexo psicológico entre la conducta y el resultado querido y una previsión respecto al resultado producido con la esperanza de que no se realice o bien una no realización, o bien una no previsión del mismo debiéndose haber previsto" (20).

Por ende los delitos preterintencionales se caracterizan por el resultado obtenido cuando al mismo tiempo es mayor al deseado.

Los delitos en cuestión se encuentran regulados por el Código de la materia en sentido Latu Sensu, así este cuerpo de leyes aplicable en el Distrito Federal dispone equivocadamente como delitos intencionales, cuando debería dárseles un tratamiento diferente, sancionándoseles con una penalidad atenuada, en virtud de intervenir en el elemento subjetivo una mezcla de dolo y culpa, enunciándose expresamente en dicho ordenamiento y no dejarlo al arbitrio del Juez.

(20) Porte Petit, Celestino. Programa de la Parte Gral. del Derecho Penal. p. 502

Desde luego estoy de acuerdo en que el delito preterintencional no puede sancionarse como un delito culposo, porque el inicio del comportamiento es lícito, por lo tanto no es encuadrable dentro de la forma benigna de la culpabilidad por culpa, sin embargo creo si merece un tratamiento diferente que será a través de la preterintencionalidad cuando así lo establezca la ley expresamente.

Por último sostienen algunos destacados juristas que la preterintencionalidad se le puede objetar su existencia, al establecer que una forma de culpabilidad excluye a la otra, pues no puede concurrir el dolo y la culpa, en un mismo supuesto por lo que la conducta sería necesariamente de uno o de otro aspecto, ya que si el obrar humano en su comienzo era doloso debe el sujeto responder a título de dolo, atendiéndose los resultados, mas sin en cambio estos autores olvidan que nunca hubo dolo respecto del resultado final, esto es el agente nunca dirigió su conducta a la producción de un resultado típico y antijurídico.

En consecuencia considero, que el objeto de la preterintencionalidad es establecer una graduación más equitativa de la penalidad, no significando en ningún momento impunidad pero si exige un criterio más amplio y más benévolo del arbitrio judicial para el sujeto activo, en estos especiales casos.

PARTES EN EL PROCESO PENAL

Brevemente describiré quienes intervienen en el proceso penal, abundando desde luego en el sujeto activo, el Agente del Ministerio Público, del sujeto pasivo u ofendido que sin ser parte del procedimiento aquí estudiamos, y el Juez de la causa.

Como sabemos únicamente el ser humano puede cometer delitos, porque sólo él tiene la capacidad de raciocinio, para entender y querer alcanzar un propósito o un resultado típico o no, por eso la persona en el campo del Derecho Penal tiene gran relevancia. Por tal motivo sólo corresponderán al infractor las sanciones penales por ser sujeto capaz de voluntad e imputable para responder de su conducta.

El Código Civil para el Distrito Federal, advierte en su Libro Primero, lo concerniente a las personas; indicado en su artículo 22 lo relativo a las personas físicas de esta manera señala:

"La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para todos los efectos declarados en el presente Código".

De esta manera sólo la persona humana en su ánimo de convivencia social se le puede encuadrar en los papeles de sujeto activo y sujeto pasivo también conocido como ofendido. Ahora pasemos a definir estas figuras.

SUJETO ACTIVO

Es la persona física con capacidad y voluntad para ser imputable en el campo del Derecho Penal, y su conducta activa o pasiva, lesiona uno o varios bienes jurídicos tutelados de los descritos en el Código Penal de la entidad en la que se cometa dicha conducta, siendo sólo las personas físicas responsables de los delitos.

Importa señalar que los daños o lesiones causados por animales bravíos y otros, hoy en día responderán por los actos de éstos sus dueños o poseedores, toda vez que ha quedado descartada la idea en los ordenamientos penales vigentes que los animales sean sujetos del Delito, como lo fue en épocas pasadas donde eran procesados por sus conductas al grado de humanizarlas. Ejemplos de procesos sobran de los más relevantes resultan, caballos homicidas, cerdos infanticidas, perros acusados de crimen. topes, langostas, etc., inclusive señala Jiménez de Asúa que "por ahí hubo un abogado que destacó por la defensa de tan absurdos sujetos".

En el campo del Derecho Penal el sujeto activo es aquella persona que con su conducta, siendo esta una actividad o una inactividad, esto es el actuar o abstenerse de obrar, acompañado del elemento psicológico (la voluntad) debidamente externada, toda vez que los pensamientos no tienen relevancia en el campo del Derecho y provoca un resultado típico y antijurídico.

Ahora bien el comportamiento humano se traduce en la conducta, y ésta a su vez se define como "el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito". Del concepto anterior se desprenden los siguientes elementos:

- a) Una manifestación de voluntad,
- b) Un resultado, y
- c) Una relación de causalidad, provocando con ese tipo de acción un resultado lesivo a un bien jurídico tutelado.

DE LAS PERSONAS MORALES.- También llamadas personas jurídicas o colectivas al respecto todavía se discute si estas pueden ser sujetos activos del delito, siendo esto para las personas físicas.

Así pues, las personas jurídicas o colectivas no pueden delinquir, pero si pueden ser sujetos pasivos del delito, por lo que se refiere al daño patrimonial y calumnias.

Sin embargo no hay que olvidar que un miembro o representante de una persona jurídica puede cometer delitos bajo el nombre y representación de ésta, aquí estaremos en el supuesto de que los demás miembros que actúen ilícitamente sean participes conjuntamente con los socios, por lo tanto de esta manera será responsable dicha persona moral.

Sólo de la forma anterior se finca la responsabilidad de las personas jurídicas, así lo considera el Código Penal de 1931, para el Distrito Federal en su artículo 11 que a continuación se transcribe.

"Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con la excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o beneficio de ella, el Juez podrá en los casos exclusivamente especificados en la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública".

Sin embargo recordemos que en nuestro sistema de Derecho Mexicano las sanciones sólo son aplicadas mediante sentencia judicial a los responsables de los delitos, hoy en día y atendiendo lo establecido en el segundo Congreso

Internacional de Derecho Penal reunido en Bucarest en 1926. las personas jurídicas son responsables penalmente cuando se trate de infracciones perpetradas con el fin de satisfacer el interés colectivo de las mismas o con los medios suministrados por ellas, no obstante debemos aceptar que la aplicación de medidas coactivas en contra de una persona jurídica, no exime de responsabilidad penal individual que por la misma infracción se exija a las personas físicas que forman parte del Consejo de Administración así como las que efectúan labores de dirección y mando de la persona colectiva.

A pesar del razonamiento anterior, aun sigue en tela de juicio la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, en virtud de que los Códigos Penales no contemplan un procedimiento específico para la exigencia de dicha responsabilidad, haciéndose inoperante el artículo 11.

Finalmente se reconoce que sólo los miembros de las personas jurídicas pueden cometer delitos, y si todos los socios están de común acuerdo para delinquir se presentará el grado de participación o co-delincuencia de personas reales, siendo obviamente la sanción por el delito que corresponda individualizada y la posible desintegración de la sociedad, previamente decretada por el Juez de la causa.

SUJETO PASIVO U OFENDIDO

Ya hemos dicho que en el delito se viola el bien jurídico tutelado por la norma y el sujeto activo es precisamente quien con su conducta infringe la ley. El sujeto pasivo es quien recibe directamente los efectos de la conducta negativa, siendo éste el titular del derecho violado, reuniendo lo papeles de sujeto pasivo y sujeto ofendido aunque no siempre le corresponde ser también el sujeto ofendido como resulta en el caso de homicidio, donde los ofendidos son los familiares del occiso, y su representante siempre lo será el Ministerio Público.

Por lo tanto cuando una persona se sienta agraviada por la conducta de otro sujeto, sólo tiene que hacer del conocimiento del Representante Social los hechos considerados como delictuosos, aportándole las pruebas en las que funde su querrela o denuncia no teniendo otra intervención directa, sino la sola manifestación de que se persiga y castigue al sujeto titular de dicha conducta cuando sea necesario.

De lo anterior se denota que la participación del sujeto pasivo es mínima en el caso de la persecución de los delitos, limitándose a efectuar como lo indica el artículo 9o. del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal: La persona ofendida por un delito podrá poner a disposición del Ministerio Público y del Juez Instructor todos los datos

"que conduzcan a establecer la culpabilidad del acusado y justificar la reparación del daño".

Sin reconocer expresamente la calidad de parte al sujeto pasivo la ley únicamente lo considera como un elemento auxiliar de la función del Ministerio Público, que ante el celo de su atribución todavía pone una serie de obstáculos tanto en la averiguación previa como en el procedimiento a la persona ofendida por el delito quedando a merced siempre de esta autoridad.

Por su parte el Código Federal de Procedimientos Penales, expresa claramente en su artículo 141 "la persona ofendida por el delito no es parte del proceso penal, pero podrá coadyuvar con el Ministerio Público proporcionando al juzgado por conducto de éste o directamente, todos los elementos que tenga y que conduzcan a comprobar la procedencia y monto de la reparación del daño y perjuicio según el caso".

En este recuadro cabe hacer alusión a la víctima que no es lo mismo que el sujeto activo, así pues la víctima es aquel o aquella persona que por razones sentimentales o de dependencia económica del ofendido, resulta afectada con la ejecución del hecho penal.

MINISTERIO PÚBLICO.- Siendo medular esta figura para la persecución de los delitos, aunque eficaz no escapa a una serie de preocupaciones en el ciudadano. La incertidumbre

radica en que se ha concentrado en el Organó Perseguidor de los delitos el monopolio de la Acción Penal, excluyendo toda intervención directa del sujeto pasivo, quien en realidad es el titular del derecho violado en su agravio. Es tal la concentración en esta institución que no puede haber proceso penal si esta no lo desea, esto es si el Organó de Acusación Pública se rehusa a promover el Ejercicio de la Acción Penal.

No dudamos que el Ministerio Público es una institución de buena fe, teniendo una gran relevancia, por ello tales preocupaciones resultan infundadas, sin embargo no olvidemos su dependencia del Poder Ejecutivo, por lo tanto en la práctica es ineludible el peligro nada abstracto de la influencia directa de la institución superior, en los asuntos de justicia punitiva.

Los sujetos que intervienen en un procedimiento de tipo penal son bastantes, sin embargo sólo forman parte del proceso tres personas, siendo estas:

a) Sujeto Activo.- Es quien realiza la conducta activa o pasiva, y con ello lesiona uno o varios bienes jurídicos tutelados, descritos en la ley represiva penal.

b) Agente del Ministerio Público.- Es el Organó del Poder Ejecutivo a quien incumbe la persecución de los delitos, debiendo además velar por la observancia de las leyes de interés general e intervenir en todos aquellos asuntos que

afecten a la sociedad y al Estado.

c) El Juez de la Causa.- Es la persona investida de imperio, para la impartición de justicia, y mediante ello trata de solucionar conflictos entre particulares y entre éstos y los Organismos Públicos, a fin de evitar se hagan justicia por su propios medios.

EL BIEN JURIDICO TUTELADO

De gran trascendencia resulta anotar lo que es jurídico tutelado, sobre todo para el estudio de los delitos cometidos por motivo de tránsito de vehículos.

Hasta la fecha no ha sido revisado como se debiera por los tratadistas de la materia, no dándole con ello la relevancia que merece. En nuestra disciplina no existe una definición propia que lo describa, sin embargo se ha traducido como el objeto jurídico del delito como punto de mira de la acción incriminable, de esta manera encontramos valores como la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, el patrimonio, la reputación, etc.

El bien jurídico protegido, aún cuando expresamente no figura en los ordenamientos penales, podemos asegurar que está latente en todos los tipos penales descritos en cada uno de los ordenamientos punitivos. Creo se trata de un elemento integrador de los mismos, pues en efecto no se puede concebir

un tipo penal que no esté protegiendo un bien jurídico, entendiendo por tal, un objeto provisto de valor, cuyo ataque o menoscabo el Estado ha considerado necesario salvaguardar mediante la amenaza de una pena.

Así pues en el delito de robo el bien protegido es el patrimonio, en el despojo, el bien jurídico tutelado es la posesión, y así sucesivamente.

El conocimiento del bien jurídico tutelado es fuente de luz para el correcto entendimiento y aplicación de la ley, asegurando en lo particular que sólo conociendo el bien jurídico protegido a cuya tutela está destinada una norma penal, se podrá comprender el significado y alcance de éste.

Con relación a los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, destacan por su grado de importancia el bien jurídico tutelado de la vida y de la integridad corporal por los delitos, homicidios y lesiones.

Toda vez la vida y la integridad corporal los valores de mayor jerarquía en toda forma de lesionarlos, pues estos bienes jurídicos tienen una connotación eminentemente personal y colectiva, porque consisten en formas de ser o estar consustanciadas a los individuos de la especie humana.

Revisten su importancia porque encarnan en intereses fundamentales que acompañan a los hombres desde el momento de

la concepción de la vida hasta la muerte, en atención al orden de conservación de la propia existencia y plenitud orgánica y funcional.

El Derecho Penal Mexicano tutela estos bienes de manera más enérgica, dada la trascendencia que guardan desde el punto de vista individual como para la co-existencia social. Por lo tanto los valores humanos de la vida y la integridad corporal no sólo interesan al individuo en quien encarnan, sino como valores jurídicos importan a toda la colectividad y siempre estará a su cuidado el Agente del Ministerio Público.

Al respecto el maestro Porte Petit señala "el objeto jurídico substancial sea el específico o bien jurídico protegido en el delito de homicidio, es la vida y como observa Rodolfo Moreno Jr. de todos los derechos, es éste el esencial y así también Antolisei hace notar que el homicidio es un delito que ofende directamente a la esencia del individuo, por esas y muchas razones, al bien protegido por homicidio se le llama bien supremo, o el bien de los bienes jurídicos".

Para terminar abundaré que el bien jurídico tutelado se muestra salvaguardado por el Derecho Penal, tanto de la conducta que lo menoscaba como del ataque que lo pone en peligro, tal es el caso del criterio adoptado por el Estado de México, al concebir como delito el manejar en estado de ebriedad según el artículo 200 de su ordenamiento penal.

COMENTARIOS

Es importante estudiar el delito de cada caso en particular conforme a las diversas teorías, conceptos, y legislación penal vigente, toda vez que cada supuesto es diferente; es también elemental analizar la personalidad del delincuente con seria profundidad, aprovechando los conocimientos experimentados por antropólogos y psicólogos entre otros, para determinar su capacidad, imputabilidad (condiciones relativas a la edad, enfermedad o salud mental) su grado de culpabilidad, las atenuantes de su conducta, su reincidencia, su habitualidad a las drogas u otras sustancias que causen efectos similares, y todo aquello que se tenga como elementos subjetivos para normar su responsabilidad, y de esta forma se le aplique la pena correspondiente.

Por lo tanto la conclusión de su Señoría, en el juicio correspondiente culminará con la determinación de si la conducta del justo activo invadió o no los campos de lo justo o de lo injusto precisados en el tipo penal que protege la norma, partiendo de la existencia de una conducta típica, dentro del marco del Derecho vamos a encontrar conductas típicas y antijurídicas sancionables y conductas típicas conforme a Derecho, esto es una conducta delictiva, pero que no es sancionada por considerarse que contiene una excusa debidamente regulada en el ordenamiento penal correspondiente, en virtud de la aplicación de una prudente

política criminal, en donde se ve inmiscuida una causa de utilidad pública.

En otro orden de ideas los delitos motivados por el tránsito de vehículos son de especie culposa, esto es, no intencionales o de imprudencia lo que los hace diferentes de los delitos dolosos, asimismo los atenúa la ausencia de esa intención, y entendimiento de buscar un resultado certero y dañoso, y creo sería difícil pensar en un sujeto capaz e imputable en el campo del Derecho Penal, abordare su vehículo para dirigirse a sus cotidianas labores y éste lo haga impactarse contra otro automóvil con el mero objeto de causar un daño en el que pueden resultar lesionados él mismo y terceras personas, así como daños materiales.

Con este estudio se pretende entre otras cosas, analizar los delitos culposos o imprudenciales refiriéndome propiamente a los cometidos con motivo de tránsito de vehículos, haciendo una revisión profunda de los grados de culpa, proponiendo que en atención a su alta frecuencia la medida para disminuirlos no es aplicando una mayor penalidad a los mismos, sino de acuerdo con una política criminal, una severa educación vial y un estricto control en la expedición de licencias y permisos para conducir, evitaran los numerosos hechos de tránsito.

CAPITULO II

TEORIA DEL DELITO

En principio se llama teoria del delito a la parte de la ciencia del Derecho Penal que se ocupa de explicar que es el delito en general, es decir cuales son las características que debe tener cualquier delito, esto no es solamente discurrir sobre el delito, sino que se debe atender un cometido esencialmente práctico consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito, en cada caso concreto.

Luego para que se cometa un delito es necesario que se realice una conducta, que sea típica antijurídica, culpable y punible, esto es que se verifiquen los aspectos o elementos positivos del delito. En caso contrario, si aparece una circunstancia que impida la configuración del mismo, estaremos en presencia de un aspecto negativo.

Por lo anterior y dentro del contexto de la Teoría del Delito, es importante estudiar los elementos positivos del ilícito penal, para saber cuando éste se configura, de igual manera analizar los aspectos negativos del delito que desde luego no van a permitir la configuración del mismo.

Antes de abordar los elementos del delito, es menester, afinar el sentido de la palabra "elemento"; literalmente

tiene un significado basado en la idea del elemento que se maneja en las llamadas ciencias experimentales, como parte integrante de un todo y que se traslada al lenguaje común, si se aplica esta definición al estudio que nos ocupa el delito viene a ser el todo, y cada uno de los elementos de este sus partes componentes.

Atendiendo su etimología, elemento proviene del latín ELEMENTUM y tiene el significado de fundamento, todo principio físico que entra en composición de un cuerpo sirviéndole de base, al mismo tiempo que concurre a formarlo.

Una definición más acorde para este estudio, la expone el maestro Porte Petit al señalar "un elemento del delito es todo un componente Sine Qua Non, indispensable para la existencia del mismo" (1).

Es difícil establecer la unidad de criterios en cuanto a los aspectos y componentes del delito, toda vez que son varias Escuelas las que estudian dentro de la Teoría General del Delito, el ilícito penal respecto, para su análisis destacan dos corrientes en el examen del delito que son:

(1) Porte Petit, Celestino. Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal. 270.

La Teoría expuesta por la Escuela Unitaria la cual considera que el delito debe ser revisado como un bloque monolítico, como un todo indivisible que requiere un estudio integral sin descomposición alguna.

Por su parte la Escuela Analítica expone que el delito debe ser estudiado en partes, y lo descompone en tantos elementos como es posible.

Lo expuesto por la Escuela Analítica permitirá el estudio de los elementos del delito, sin embargo sea cual fuera la corriente elegida para analizar el ilícito, no debemos perder de vista lo expuesto por Antolisei "el delito no es una suma de elementos separados, sino un todo orgánicamente homogéneo" (2).

La mayoría de los tratadistas han dividido en diversos elementos al delito, señalando aspectos positivos y negativos del mismo frente a lo que no lo es y de acuerdo al número considerado ha surgido una amplia gama de teorías, tales como la bitómica, la tritómica, tetratómica, la pentatómica, hexatómica y la heptatómica, expuesta esta última por el maestro Jiménez de Asúa en donde hace figurar siguiendo el

(2) Franco Guzmán, Ricardo. El Estudio Analítico del Delito. p.84.

método aristotélico tantos factores positivos como negativos como se desprenden de su definición del delito siendo lo siguientes:

ASPECTOS POSITIVOS

- A. Actividad o Conducta
- B. Tipicidad
- C. Antijuridicidad
- D. Imputabilidad
- E. Culpabilidad
- F. Condiciones objetivas
de Punibilidad
- G. Punibilidad

ASPECTOS NEGATIVOS

- a. Ausencia de conducta
- b. Ausencia de tipo y
atipicidad
- c. Causas de justificación
- d. Inimputabilidad
- e. Inculpabilidad
- f. Falta de condiciones
objetivas de punibilidad
- g. Excusas absolutorias

En lo particular considero que la imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad o si se quiere del delito pero no un elemento, respecto de las condiciones objetivas de punibilidad, son meros requisitos ocasionales establecidos por el Legislador para la aplicación de la pena, así también la punibilidad, creo se trata de una consecuencia del delito, y a reserva de ampliar más esta posición pasaré a desarrollar todos los elementos positivos por esenciales o no siguiendo la idea del jurista Jiménez de Asua para tener una idea más abundante de la materia.

A. ACTIVIDAD O CONDUCTA

Siendo la conducta la célula misma del delito, al grado de ser considerada por algunos autores como la *Conditio Sine Quan non* para su existencia, concluyendo que si no hay acción humana no habrá delito, y en consecuencia sería absurdo pretender estudiar sus demás elementos.

La conducta se conoce con diferentes nombres, tales como actividad, hecho, acción y otros. Fernando Castellanos indica "conducta es el término más apropiado para este primer elemento, toda vez que abarca tanto la actividad como la inactividad, y dicho de otra manera el actuar y el abstenerse de obrar ante un mandato expreso de la ley; y concluye la conducta es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito" (3).

Por su parte Porte Petit utiliza una terminología variada así unas veces denomina al elemento objetivo con la palabra "conducta" y otras con el vocablo "hecho", según la hipótesis que se presente, para el caso señala "ello nos lleva forzosamente a precisar que no puede adoptarse uno sólo de dichos términos, si se aceptará "conducta" sería reducido y no abarcaría los casos en los cuales hubiera un resultado

(3) Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales del Derecho Penal. p. 149.

material y un "hecho" resultaría adecuado porque comprendería además de la conducta el resultado material consecuencia de aquella" (4).

El tratadista mexicano Mariano Jiménez Huerta, al respecto indica "nosotros empero, preferimos la expresión conducta, no solamente por ser término más adecuado para recoger en su contenido conceptual las diversas formas en que el hombre se pone en relación con el mundo exterior sino también por reflejar mejor el sentido finalista que es forzoso, coartar en la acción o inercia del hombre para poder llegar afirmar que integran un comportamiento dado. Un comportamiento humano es trascendente para el Derecho Penal, en cuanto se plasma en una conducta que deja su presencia en el exterior.

No son conductas relevantes para el derecho penal los actos que se desenvuelven en el ámbito de la conciencia, sean pensamientos, deseos, propósitos o violaciones.

Así el deseo es siempre un acontecimiento que se realiza en el mundo interno, el acto psíquico que no se traduce en un comportamiento externo, esto es, un Quid, no es jamás punible". (5)

(4) Porte Petit, Celestino. op. cit. p. 155.

(5) Jiménez Huerta, Mariano. Panorama del Delito. p. 8.

En lo particular prefiero allanarme a la terminología del maestro Porte Petit, en denominar unas veces conducta al elemento objetivo y otras hecho; así se hablará de conducta cuando el tipo penal no requiere para su integración de la producción de un resultado material, y de hecho si la descripción típica exige una mutación en el mundo exterior.

En sentido estricto la conducta es un comportamiento humano voluntario, capaz de modificar el mundo de relación o de hacer factible dicha alteración.

Cuello Calón expone la acción es "el movimiento corporal voluntario encaminado a la producción de un resultado, consistente en la modificación del mundo exterior, o en el peligro de que se produzca" (6). De la definición anterior se desprenden los siguientes elementos para integrar la acción :

1. UNA MANIFESTACION DE VOLUNTAD.- Se refiere a la voluntad del agente o del sujeto activo de la acción, esta debe abarcar tanto la conducta como el resultado, en virtud de que el individuo desea realizar una conducta y por lo tanto provocar un resultado.

(6) Cuello Calón, Eugenio. Derecho Penal. p. 27.

2. UN RESULTADO.- se entiende como la consecuencia originada por la conducta realizada por el sujeto activo.

3. UNA RELACION DE CAUSALIDAD.- Esta debe concurrir entre la conducta y el resultado que los une, esto es debe haber un nexo causal que ligue al sujeto con su acto. Teniendo el resultado como causa, un hacer del agente por haber realizado una conducta positiva.

NEXO CAUSAL

Como se ha dicho en los delitos de omisión simple sólo tienen resultado jurídico, y otros que producen además un resultado material, ocasionando un cambio en el mundo exterior, esta mutación puede ser en el orden físico, fisiológico o psicológico.

Así pues, resulta imprescindible para la integración del delito la existencia de un nexo causal entre la conducta del agente y el resultado concreto, dándose así un vínculo en la acción del sujeto activo como causa generadora y las alteraciones orgánicas o mentales en una persona como efecto, por decir en los delitos de lesiones.

Para ilustrar lo referente al nexo, han surgido diversas teorías sin embargo se pueden agrupar en dos principales corrientes:

Primera.- Encabezada por la Teoría de la Equivalencia de las Condiciones o teoría de la Conditio Sine Quan Non, esta considera que todas las condiciones productoras del resultado por lo que todas estas condiciones son la suma de cada causa y que trae como consecuencia el resultado. Y para entender esta relación diremos que el hecho se refiere únicamente al problema de la causalidad material, esta teoría se encarga precisamente del elemento objetivo del delito y no del nexo psicológico entre el sujeto y la conducta.

Segunda.- Donde se ubica la teoría Individualizadora, ésta considera sólo una causa como productora del resultado en atención a circunstancias de orden temporal cuantitativo y cualitativo.

Considero más apropiada la teoría de la Equivalencia de la Condiciones, en virtud de ser indiscutible que el resultado del delito se produce con la concurrencia de todas las condiciones, de tal manera que suprimida una de ellas el resultado simplemente no se realiza.

De esta manera para determinar el nexo causal del delito de lesiones, se procede a comprobar si la conducta del agente es Conditio Sine Quan Non de la alteración en la salud que sufre el sujeto pasivo, una vez hecho lo anterior habrá de probarse si el nexo que liga a ambos en el caso concreto, es el racionalmente adecuado para producir dicho resultado.

Ya dijimos que la conducta humana reviste en formas activa o en forma pasiva, de ahí la distinción entre delitos de acción y delitos de omisión.

DE LA OMISION

Ahora en cuanto a la omisión se refiere, esta estriba en una abstención, esto es dejar de hacer lo debido y es una forma negativa del acto, al respecto Cuello Calón expone:

"la omisión consiste en una inactividad voluntaria cuando la ley penal impone el deber de ejecutar un hecho determinado"(7). De ahí que Sebastián Soler penalista argentino sostenga que "el delincuente puede violar la ley sin que un sólo músculo de su cuerpo se contraiga, mediante una omisión o una abstención".

Para configurar la omisión es necesario que concurren los siguientes requisitos:

- a.- La voluntad.- En este caso el individuo deja de realizar una conducta a la cual tiene obligación de hacer.
- b.- La inactividad.- Aquí la voluntad del sujeto se encamina a no ejecutar la acción ordenada por el Derecho.

(7) Cuello Calón, Eugenio. op. cit. p. 27.

Así pues, mientras los delitos de acción consisten en realizar actos prohibidos, los de omisión residen en un no hacer lo expresamente ordenado y por ello se ha dicho que en los delitos de acción se vulnera una norma prohibitiva, en tanto en los de omisión se infringe una norma dispositiva.

Ya se indicó en el capítulo anterior que en los delitos de omisión simple, la sola inactividad del sujeto llena el presupuesto del elemento objetivo, y se sanciona por la sola inactividad, tal es caso del abandono de personas pues con independencia de que se produzca o no el daño, en éste con la sola omisión de auxilio se satisfacen las condiciones típicamente exigidas por el tipo penal. Y en los delitos de comisión por omisión existe una inactividad productora de un resultado material, con violación de dos disposiciones, una preceptiva y una prohibitiva.

Los requisitos de la omisión surgen tanto en los delitos de omisión simple como en los de comisión por omisión, más de esta última requiere de:

1. La existencia de un resultado material típico,
2. La aparición de una relación de causalidad entre el resultado y la abstención.

Con lo expuesto indudablemente en los delitos de mera conducta no existe relación causal entre el comportamiento humano y la mutación del mundo exterior, sólo se advierte una

relación de tipo jurídico entre el hacer o el abstenerse; al respecto surge el problema de saber si en los delitos de olvido existe realmente la voluntad, al respecto el maestro Jiménez Huerta señala "que en los delitos de olvido hay voluntad pues basta la voluntad de la conducta diversa".

De esta manera se concluye que en la acción hay una actividad que puede ser regida por la voluntad o ser producto de una tendencia o impulso y en la omisión una actividad voluntaria o involuntaria que implica un no hacer o una abstención.

B. TIPICIDAD.

Para el estudio del segundo elemento del delito es propio establecer lo que se debe entender por "TIPO": "Es la descripción que hace el Estado de una conducta en los preceptos penales" (8). De igual forma Tipo es la descripción legal de una conducta considerada como delito en el ordenamiento penal. Para nosotros el tipo penal se entiende como la descripción de la conducta delictiva contemplada en la norma y la concepción legal dentro del campo de un comportamiento humano reputado como delito.

(8) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 165.

En este orden cabe recordar la máxima "Nullum Crimen, Nula Poena Sine Lege", cuyo significado se traduce en que nadie puede ser castigado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por una ley, ni con penas que no se hubieran establecido plenamente. Este principio impide la aplicación de la analogía adoptado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y traducido en el espíritu de cada uno de los ordenamientos penales del País, con el principio "Indubio Proreus", cuyo significado corresponde a que en caso de duda debe absolverse a un presunto responsable.

Visto de este modo para que un comportamiento humano sea considerado antijurídico antes debe ser típico, es decir la conducta debe encuadrarse por completo y sin lugar a duda en una descripción del ilícito penal de que se trate de conformidad con los delitos enunciados en la legislación penal.

Habiendo descrito el concepto del tipo ahora pasemos a definir la tipicidad: la cual es la adecuación de una conducta concreta al tipo penal, es decir encuadrar un hecho real a la hipótesis legislativa.

No siempre es fácil adecuar una conducta a la descripción legal y habrá casos en que un comportamiento se adecúe perfectamente al tipo legal, y en otros en que no se encuadre

debidamente a lo tipificado.

Jiménez Huerta señala que la tipicidad consiste "en un juicio lógico en donde se afirma que la premisa histórica esto es la conducta humana, esta contenida y subsumida en la premisa legal, y esto es el tipo de cualquier caso particular".

Por último no debe confundirse la tipicidad con el tipo penal, así mientras la primera es un elemento esencial del delito y que requiere para su plena configuración en el mundo externo, quedando como el encuadramiento de una conducta a la descripción contenida en la Ley, el segundo es una creación del Legislador respecto de una conducta considerada como delictiva y se tiene como un presupuesto del delito dando cabida a la Máxima de Derecho "Nulo Crimen Sine Tipo".

C. ANTIJURICIDAD

También llamada antijuridicidad y se entiende como la conducta humana contraria al Derecho, que adecuada a un tipo penal y sin la existencia de una causa de justificación dará origen a un delito.

Tomando en cuenta que la antijuricidad es lo contrario al Derecho, en este sentido Francisco Carrara señala que se trata de la infracción de la ley del Estado, concluyendo que no es lo contrario a la ley, sino es el acto que se ajusta a

lo previsto en la ley penal.

Luego entonces existe antijuricidad cuando se viola el deber o las obligaciones jurídicas, además de la lesión o el peligro que sufre un bien jurídico tutelado por el Derecho.

La antijuricidad es un concepto meramente valorativo y es un juicio de estimación objetiva, por medio de la cual sabemos cuando una conducta típica es contraria a Derecho.

Existen conductas típicas y a la vez no antijurídicas contrarias a Derecho, tal es el caso del homicidio en legítima defensa, en este supuesto media siempre una causa de justificación (aspecto negativo de la antijuricidad) que impide la configuración del delito;

Hoy en día a la antijuricidad se le ubica como un acto negativo, traducido en la desaprobación de un hecho humano frente al Derecho y tomando en cuenta que es el Estado quien tiene la facultad del Poder Punitivo para castigar al sujeto activo, lo antijurídico será pues todo aquello que contradice un mandato de Legislador, sin que medie una causa de justificación, porque en su defecto estaríamos hablando propiamente de su correlativo elemento negativo.

Abunda al respecto Cuello Calón al decir "la antijuridicidad presupone un juicio o una estimación de la oposición existente entre el hecho realizado y una norma jurídico-penal

Tal juicio es de carácter objetivo, por solo recaer sobre la acción ejecutada" (9).

Así también, el maestro Porte Petit señala "una conducta será antijurídica, cuando se adecúa al tipo penal, además si no prueba la existencia de una causa de justificación y recalca así funcionan los Códigos penales mediante un ordenamiento de exclusión, esto es con la concurrencia de una doble condición por eso para considerar una conducta como antijurídica se necesita la violación de una norma penal y la ausencia de una causa de justificación" (10).

No basta observar si la conducta es típica, sino además se requiere en cada supuesto verificar si el hecho examinado cumple con ese requisito de adecuación a la norma y constituye una violación al Derecho, teniendo como base una doble necesidad de adecuación del hecho a la figura que lo describe y de oposición al principio que lo valora.

Pero recordemos que la antijuricidad es objetiva y sólo atiende al acto y a la conducta externa y para llegar a la afirmación de que una conducta es antijurídica, es necesario

(9) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 178.

(10) Porte Petit, Celestino. op. cit. p. 285.

precisar un juicio de valor y una estimación de esa conducta, en la fase material y en la escala de valores del Estado.

Diversos autores clasifican la antijuricidad en formal y material, de esta manera el acto es formalmente antijurídico cuando viola una norma establecida por el Estado (esto es oposición a la ley), existe una rebeldía en contra de la norma legal. Mientras el acto será materialmente antijurídico en cuanto implique una contradicción a los intereses colectivos, apareciendo aquí un daño o perjuicio social causado por esa rebeldía, esto es cuando la violación de esa norma implique un daño a la sociedad.

D. IMPUTABILIDAD.

La imputabilidad es el presupuesto de la culpabilidad, de esta manera para que un sujeto sea culpable, antes debe ser imputable, pues si en la culpabilidad intervienen el conocimiento y la voluntad, se requiere entonces de la posibilidad de ejercer esas facultades y de esta manera el individuo conozca la ilicitud de su acto y quiera luego realizarlo, por lo tanto, debe tener capacidad de entender y querer los resultados positivos o negativos de dicho acto y solo de esta manera, podrá ser un sujeto imputable (calidad del sujeto, capacidad ante el Derecho Penal), luego entonces la aptitud intelectual y volitiva constituye el presupuesto necesario de la culpabilidad, de ahí que se considere a la

imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad.

En este orden de ideas lo expone Castellanos Tena y reproduce lo que para Max Ernesto Mayer es la imputabilidad y señala "es la posibilidad condicionada por la salud mental y por eso el desarrollo del autor, es decir obra según su justo conocimiento del deber existente" (11).

De esta forma la capacidad para obrar en el campo del Derecho Penal es equivalente a la imputabilidad, esto es realizar actos referidos al citado Derecho, que traigan consigo las consecuencias penales de la infracción.

"En pocas palabras la imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el campo del Derecho Penal".

La imputabilidad se compone por el conjunto de condiciones mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor, que lo capacita para responder del mismo, comúnmente se afirma que la imputabilidad está determinada por un mínimo físico representado por la edad, otro psíquico consistente en la salud mental, de ello se desprende que contiene dos elementos básicos, uno intelectual referido a la capacidad para comprender y el segundo el volitivo referido a la capacidad

(11) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. p. 218.

para desear un resultado, desde luego es importante no perder de vista en el análisis de este elemento, el papel de la responsabilidad, la cual no es otra cosa que el deber jurídico en que se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la sociedad por el hecho o conducta realizada.

Respecto de la capacidad establece el Código Civil para el Distrito Federal lo siguiente:

Art. 22.-"La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte ... la menor edad, el estado de interdicción y las incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica ...".

Por lo tanto un sujeto será imputable al cumplir la mayoría de edad. Y posea salud y desarrollo psíquico normal. Respecto de la mayoría de edad señala el Ordenamiento de lo Civil en cita "la mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos" y tomando en cuenta que el sujeto mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes, por lo tanto se concluye que es un sujeto capaz de entender y querer un resultado en el campo del Derecho Penal, y por ello imputable y Vasto para responder por sus actos.

Empero aún cuando sea mayor de edad, no está exento de adquirir una incapacidad o de caer en estado de interdicción, pues éste al consumir en exceso drogas enervantes o al sufrir

un fuerte golpe en la cabeza, le puede colocar en el campo de los incapaces para el campo del Derecho Penal.

Importa señalar que son imputables, aquellos que tienen desarrollo de la mente y no padecen alguna anomalía psicológica que los imposibilite para entender y querer un resultado, y sean poseedores al mismo tiempo del mínimo de salud mental y desarrollo psíquico exigido por la ley del Estado.

Para terminar es menester dejar bien claro que la imputabilidad es necesaria para la existencia de la culpabilidad, sostiene Jiménez de Asúa "la imputabilidad es la base psicológica de la culpabilidad, concluyendo que la esencia técnico-jurídica de la infracción penal radica en tres supuestos, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad" (12).

E. CULPABILIDAD.

La culpabilidad se concibe como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto, y se caracteriza por la reprochabilidad hacia el sujeto activo por haberse

(12) Jiménez de Asúa, Luis. op. cit. p. 207.

conducido contrariamente a lo establecido por la norma jurídico-penal.

La culpabilidad consiste en la desobediencia del sujeto al orden jurídico de los mandatos y prohibiciones que lo conforman y esta oposición se constituye con el dolo y la culpa en la intención o desatención.

Una conducta es delictuosa, no sólo cuando se encuentra dentro del tipo legal y antijurídico, sino además cuando es culpable.

Jiménez de Asúa señala "la culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica".

Para Villalobos "La culpabilidad es el desprecio del sujeto por el orden jurídico y por los mandatos y prohibiciones que tienden a constituirlo y conservarlos, desprecio que se manifiesta por la franca oposición en el dolo indirectamente por indolencia o desatención nacida del desinterés o subestimación del mal ajeno frente a los propios deseos de la culpa".

NATURALEZA JURIDICA DE LA CULPABILIDAD.

Para el estudio de la naturaleza jurídica de la culpabilidad dejan mayor claridad las siguientes Teorías:

Teoría Psicologista.- Establece que la culpabilidad se encuentra en un hecho de carácter psicológico, por lo tanto la culpabilidad se presenta en el proceso intelectual y volitivo, desarrollado por el autor.

Para los psicologistas la culpabilidad se agota sólo en el hecho psicológico, pero desde luego, con relación a la conducta, a la tipicidad, a la antijuricidad y sobre estas figuras se analiza la culpabilidad.

Por su parte la Teoría Normativa.- Establece que la culpabilidad constituye un juicio de reproche toda vez que un sujeto capaz que ha obrado con dolo o culpa, se le exige una conducta diversa a la realizada, con base en el orden normativo, recordando que solamente se va a exigir un deber jurídico a los imputables, los que solo pueden comportarse conforme a lo establecido por la norma. Ahora el hecho de que toda afirmación de culpabilidad implique un reproche, una crítica y hasta una punibilidad para el sujeto, ha polarizado la atención, induciendo a pensar que la esencia de la culpabilidad no radica en el sujeto culpable, sino en la comparación de la conducta con determinadas normas desatendidas o en una especial valoración, puesto que la afirmación de la culpabilidad lleva consigo su estimación.

De las anteriores teorías se desprende que el juicio de reproche surge con dos situaciones que son las siguientes:

Primera.- Con una conducta real, dolosa o culposa y que el sujeto activo pudo evitar.

Segunda.- Con una conducta normativa que le exigía al sujeto un comportamiento conforme a derecho (traducido este en un deber jurídico).

Ambas teorías tienen su razón de ser, toda vez que en su conjunto se constituye al reproche de lo injusto realizado por el sujeto activo quien actuó con desatención o imprudencia. Sin embargo me parece más apropiado el criterio de la Teoría Psicologista, en razón del mejor tratamiento para determinar la culpabilidad, pues al considerar que ésta radica en el hecho psicológico causal del resultado, es más acorde incluso con la corriente asimilada por el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 8o.

La culpabilidad se manifiesta en dos formas, estas son en dolo y en culpa, aunque algunos especialistas hablan de una tercera forma refiriéndose a la preterintencionalidad cuando el resultado sobrepasa al deseado por el agente activo del delito.

F. CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD.

Las condiciones objetivas de punibilidad son "aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el Legislador para que la pena tenga aplicación".

Las condiciones objetivas de punibilidad no son elementos esenciales del delito, ya que si las contiene la descripción legal, se tratará de caracteres o partes integrantes del tipo penal y por lo tanto accesorios y fortuitos.

Las condiciones objetivas de punibilidad son circunstancias extrínsecas, de cuya verificación depende la punibilidad o la no punibilidad. Estas condiciones están más allá del proceso de la causalidad material y moral del hecho.

Siendo especiales conductas que señala taxativamente el Legislador y de su realización depende que entre en juego el elemento punibilidad.

En el ordenamiento penal en cita, se dejan ver condiciones objetivas de punibilidad en los siguientes artículos: 4 fracción III, 62, 263, 274, 310, 360, 385, entre otros.

G. PUNIBILIDAD

Una conducta típica, antijurídica y culpable debe tener como complemento, la amenaza de una pena. Y la punibilidad propiamente dicha se traduce en el merecimiento de la pena con base en la realización de cierta conducta.

Luego entonces un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la pena.

La punibilidad se compone de tres elementos a saber:

1. Merecimiento de una pena, .
2. La conminación estatal de imposición de sanciones si se llenan los presupuestos legales, y
3. La aplicación fáctica de las penas señaladas en la ley.

La punibilidad es la amenaza de la pena que el Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas jurídicas, dictadas para organizar la permanencia del orden social.

En este sentido cabe señalar el concepto de la pena.- es el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden jurídico, el mantenimiento, la armonía y convivencia social.

También se dice que la pena es la reacción de la sociedad o el medio de que ésta se vale para tratar de reprimir el delito.

Entonces, la pena es el castigo que sufre el sujeto en un delito como resultado de la infracción de la norma penal, de tal manera que puede la pena tener como objeto diferentes fines a saber:

- 1.- Intimidatoria, en virtud de que con su castigo, debe infundir un temor tal para invitar a no delinquir más.
- 2.- Ejemplar, lo será para el delincuente como para el público a fin de que se observe la efectividad de la propia

pena, sin embargo el delincuente pocas veces piensa en las consecuencias penales a que haya lugar.

3.- Correctiva, lo es porque con su aplicación se pretende buscar la readaptación, la rehabilitación del sentenciado.

4.- Eliminatoria, porque permite segregar temporal o definitivamente de la sociedad al individuo, según se trate de un sujeto readaptado total o parcialmente..

Mucho se ha discutido acerca de si la punibilidad es un elemento más del delito o una consecuencia del mismo, pues hay quienes afirman que efectivamente es un aspecto del delito y no una consecuencia, en virtud de que si el artículo 7o. del Código Penal para el Distrito Federal, señala que "el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales", entonces exige explícitamente la pena legal, y pone de por medio las denominadas excusas absolutorias, para no atribuirle el carácter de consecuencia, toda vez que si una conducta no es punible no encaja en la definición de delito.

Por el contrario autores como Raúl Carranca y Trujillo, Ignacio Villalobos y más tarde el mismo Porte Petit consideran a la punibilidad como un presupuesto del delito, de esta manera señala Porte Petit, "cuando existe una hipótesis de ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, concurre una conducta o hecho, típicos, antijurídicos, imputables y culpables, pero no punibles en

tanto no se llene la condición objetiva de punibilidad, lo cual viene a confirmar que esta no es un elemento sino una consecuencia del delito".

Corresponde en seguida analizar los aspectos negativos del ilícito penal:

Ha quedado claro que el delito es el acto antijurídico y culpable, siendo necesarios para configurar una conducta, que sea típica, antijurídica y culpable. Evidentemente los elementos negativos que no permitirán la configuración del delito serán: la ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de justificación y la inculpabilidad.

Sin embargo dicho lo anterior considero hacer un esbozo en el desarrollo de los elementos negativos del delito, siguiendo la teoría heptatómica expuesta por el maestro Jiménez de Asúa, dando así paso al primer elemento.

a. AUSENCIA DE CONDUCTA

La configuración del delito, prescinde de entre otros elementos de la existencia de una conducta, lo que significa que sin este requisito indispensable, es imposible la integración del ilícito penal.

Frente al aspecto negativo de la conducta los autores suelen incluir la Vis Absoluta o Fuerza Física Exterior

Irresistible, de esta manera "...la aparente conducta, desarrollada como consecuencia de una violencia irresistible, no es una acción humana, en el sentido valorativo del Derecho por no existir manifestación... quien así obra no es en ese instante un hombre, sino un mero instrumento".

De igual manera consideran como factores eliminatorios de la conducta la Vis Maior o Fuerza Mayor y a los movimientos reflejos, (toda vez que son movimientos corporales involuntarios y no pueden ser controlados por el sujeto).

Otros autores toman por verdaderos aspectos negativos de la conducta, el sueño, el hipnotismo y el sonambulismo, sin embargo para otros juristas estos mismos son considerados como causas de inimputabilidad.

El aspecto negativo de la conducta comparece cuando en ocasiones un sujeto comete un acto de apariencia delictuosa, pero dicha conducta no puede atribuirsele el carácter de comportamiento humano voluntario, tal sería el caso de la fuerza irresistible, por lo que al no integrarse el elemento esencial del delito, no habrá tal, y su fundamento se encuentra en lo establecido por el artículo 15, fracción I del Código Penal ampara el Distrito Federal el cual señala "incurrir el Agente en actividad o inactividad involuntarias".

Por último cuando se presenta la ausencia de conducta el

ilícito no se configura, a contrario sensu de lo establecido en el artículo séptimo del Ordenamiento Penal en cita.

b. ATIPICIDAD Y AUSENCIA DE TIPO

Para empezar es necesario delimitar en que momento se está ante la ausencia de tipo penal, y éste ocurre cuando en la legislación no existe la descripción humana presumiblemente delictuosa.

Se considera como ausencia de tipo a la omisión hecha por el legislador, al no describir una conducta en un tipo penal, surgiendo así la figura de la atipicidad, al no poderse encuadrar la conducta a una descripción legal.

Por lo tanto si no existe un tipo que contenga expresamente cualquier conducta ilícita, por injusta, lesiva o peligrosa que parezca jamás podrá constituir un delito, estando ante la hipótesis de un caso de falta de tipo penal.

La atipicidad es el aspecto negativo de la tipicidad y tiene valía suficiente para no permitir la configuración del delito.

Las causas de atipicidad más frecuentes de acuerdo con Jiménez de Asúa en su Tratado de Derecho Penal son las siguientes: por,

1. Ausencia de adecuación típica,

2. Faltar en el sujeto activo la calidad requerida por la ley
3. Faltar en el sujeto pasivo la calidad requerida por la ley
4. Faltar la calidad del objeto o por falta de objeto,
5. Falta de referencias temporales,
6. Falta de referencias espaciales,
7. Falta de medio exigido por la ley,
8. Falta de elemento subjetivo del injusto.

Para saber cuando estamos en el supuesto de la ausencia de tipicidad, es menester señalar lo siguientes:

Primero. Cuando no concurren en un hecho concreto todos los elementos del tipo penal y son distintas también las hipótesis que pueden concebirse.

Segunda. Cuando la ley penal no ha descrito la conducta, que en realidad se nos presenta con características antijurídicas (ausencia de tipicidad en sentido estricto) o lo que viene a ser lo mismo carencia de tipo.

Concluyendo, si no se reúnen los requisitos mínimos indispensables para configurar la tipicidad, se estará en presencia de la atipicidad que no es otra cosa que la ausencia de adecuación de la conducta al tipo penal.

c. CAUSAS DE JUSTIFICACION

Ocurren cuando, la conducta típica está aparentemente en

oposición al Derecho pero existe una causa que constituye el elemento negativo de la antijuricidad.

Las causas de justificación son aquellas circunstancias que eliminan la antijuricidad y su función consiste en que a pesar de que una conducta es contraria a Derecho, estas causas van hacerla lícita.

Podemos agregar que se trata de aquellas causas o circunstancias que justifican la ejecución de una conducta y recaen sobre la acción realizada, y no al sujeto que las ejecuta son objetivas reales y aprovechan a todos los coparticipes, y a no acarreen ninguna consecuencia civil o penal.

Jiménez de Asúa señala en este orden "en las causas de justificación no hay Delito, en las de inimputabilidad no hay delincuente, en las excusas absolutorias no hay pena" por lo tanto, todas aquellas causas que impidan la aplicación de alguno de los elementos de delito evitarán la configuración del ilícito.

Las causas de justificación resultan de la declaración hecha por el Legislador, al establecer el medio de neutralizar la antijuricidad.

El Estado excluye la antijuricidad que en condiciones ordinarias subsistiría, cuando no existe el interés que se

trata de proteger o cuando concurren dos intereses jurídicamente tutelados y no pueden salvaguardarse ambos el Derecho opta por conservar el más valioso.

Las causas de justificación más connotadas son:

- I. La legítima defensa,
- II. El estado de necesidad,
- III. El ejercicio de un derecho,
- IV. El cumplimiento de un deber, y
- V. El impedimento legítimo.

d. INIMPUTABILIDAD.

La componen las cuestiones que tienen la virtud de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica para delinquir. Recordemos que la inimputabilidad es el aspecto negativo de la imputabilidad, por lo tanto será la incapacidad para entender en el campo del Derecho Penal.

Las causas de este aspecto lo constituyen principalmente:

- a) La minoría de edad
- b) Los trastornos mentales
- c) El desarrollo intelectual retardado, y
- d) El miedo grave.

e. INCULPABILIDAD

Corresponde como elemento negativo de la culpabilidad y se traduce en la absolución del sujeto activo en el juicio de reproche por encontrarse ausentes los elementos de la culpabilidad, siendo estos el conocimiento y la voluntad.

Por eso una conducta no será culpable si falta alguno de los elementos anteriores en cuestión.

Las causas de inculpabilidad se encuentran previamente cuando no existe en lo externo una causa de justificación y en lo interno una causa de inimputabilidad.

Para integrar la culpabilidad se requieren los elementos intelectual y volitivo, por lo tanto para que concurra la inculpabilidad es necesario que no se presenten dichos elementos, luego entonces se presentan como partes de la inculpabilidad el error esencial de hecho que ataca al elemento intelectual y la coacción sobre la voluntad que afecta el elemento volitivo, algunos autores incluyen la no exigibilidad de otra conducta, sin embargo considero que en esta última aún no ha sido determinado cual de los dos elementos de la culpabilidad se neutraliza, por lo cual he decidido dejarlo fuera de este estudio.

En este renglón cabe apuntar la diferencia entre el error de la ignorancia, de esta manera el primero es una falsa

apreciación de la verdad, un conocimiento incorrecto, esto es, se conoce, pero se conoce equivocadamente. Por tal razón el que obra con error lo hace sin malicia, sin el conocimiento ni la voluntad dirigida a la producción de un resultado típico y antijurídico. Mientras en la ignorancia simplemente hay ausencia de conocimiento.

En el error existe una falsa apreciación de la realidad, y en la ignorancia hay carencia de conocimiento, ésta última constituye una laguna del entendimiento, porque nada se conoce ni como erróneo ni como exacto.

El error y la ignorancia pueden constituir causas de inculpabilidad, pero sólo si producen en el autor desconocimiento o un entendimiento equivocado sobre la antijuricidad de su conducta.

El error se presenta como:

ERROR DE DERECHO, el cual no produce eximente, porque aún cuando equivocado el concepto del significado de la ley, no autoriza a nadie para violarla, por ello no se justifica su transgresión.

ERROR ESENCIAL este impide al agente conocer la antijuricidad de su conducta, esto es actúa antijuridicamente, creyendo hacerlo conforme a Derecho, en sí hay desconocimiento acerca de lo antijurídico de su conducta, y ello afecta el elemento

intelectual del dolo. Pero debe ser invencible dicho error, porque de lo contrario dejará la culpa subsistente.

ERROR ACCIDENTAL surge cuando el sujeto activo desea un resultado y se le presenta otro que no es precisamente el deseado. Cayendo el resultado sobre circunstancias secundarias del hecho y no en las esenciales del mismo. El error accidental lo puede ser en el golpe o en la persona.

Toca analizar el aspecto que afecta el elemento volitivo, en concreto refiriéndome a la coacción sobre la voluntad.

Respecto de este caso se encuentran la obediencia jerárquica, acorde a lo establecido por el Ordenamiento Penal para el Distrito Federal al señalar "cuando obedeciendo las ordenes de un superior y no siendo relevante el criterio del agente sobre la licitud o ilicitud de la conducta ordenada se comete un delito, pero el inferior actúa cumpliendo una obligación legal, por lo tanto se presenta una causa de justificación".

Entonces si el inferior conoce la ilicitud de la orden y no pudiéndose negar a realizarlo, lo hace ante la amenaza de sufrir graves consecuencias, como el perder el trabajo o ser reprendido, entonces se integra la inculpabilidad en vista de la coacción sobre el elemento volitivo o emocional.

Con respecto a la no exigibilidad de otra conducta esta se debe entender como la realización de un hecho penalmente

tipificado pero una situación muy en especial la hace inexcusable de ese comportamiento.

Conforme a la doctrina se ha establecido que tanto la no exigibilidad como el error esencial de hecho son causas eliminatorias de la culpabilidad.

La no exigibilidad de otra conducta presenta como característica, que ésta no desintegra al delito en alguno de sus elementos, como lo hacen los aspectos negativos del mismo, sin embargo en atención a la equidad, o bien a la convivencia política si puede motivar un perdón o una excusa que impide la punibilidad del delito cometido. Quedando entonces para algunos autores como una causa de inculpabilidad y para otros la motivación de una excusa que excluye la pena del delito.

La no exigibilidad de otra conducta se presenta en los siguientes supuestos:

1. Por la existencia de un temor fundado,
2. Por encubrimiento a parientes y allegados, y
3. Por un estado de necesidad tratándose de bienes del Estado.

f. FALTA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD

Ya se ha dicho que las condiciones objetivas de punibilidad son meros requisitos ocasionales, accesorios y fortuitos del

delito, por ello se sostiene que la falta de estas, precisamente serán esos requisitos ocasionales y accesorios que faltarán en un determinado ilícito.

Por lo mismo si las condiciones objetivas de punibilidad no son elementos esenciales del delito, mucho menos lo serán la falta de éstas para eliminar al mismo.

Lo esencial debe entenderse como necesidad, no poder faltar en uno sólo de los individuos de la especie humana, sin que éste deje de pertenecer a ella, por lo mismo tener como esenciales estas condiciones de ocasión, que con más frecuencia faltan, que concurren en los delitos, sólo se explica como efecto de un perjuicio arraigado.

g. EXCUSAS ABSOLUTORIAS

A reserva de hacer un examen más exhaustivo de éstas se consideran como aquellas situaciones expresamente señaladas en la ley, que dejando subsistente el carácter de delito, impiden la aplicación de la pena. Esto es cuando el Estado no sanciona determinadas conductas por razones de justicia o equidad, desde luego los elementos del delito permanecen inalterables, siendo éstas causas los que impiden la aplicación de la pena.

COMENTARIOS

Partiendo de que todos los delitos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos son considerados de antemano, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México como culposos o de imprudencia y se les sanciona por medio de una regla especial diferente a la de los demás delitos, constituyendo un mejor tratamiento para los ilícitos que se cometen con estos medios.

Lo anterior con base en la valoración que se hace de la culpa, en donde el agente no desea los resultados dañosos, sin embargo al no quedar exento de la propia naturaleza de la circulación de vehículos, y en atención a su alto grado de aparición, el Estado ha decidido ser más benevolente.

Creo es prudente señalar la forma de aparición de los delitos culposos y su razón por la cual han de ser penalizados con una mínima sanción.

En principio el delito se consuma cuando el sujeto activo del mismo integra con su conducta los elementos del tipo penal.

El tipo penal supone la realización de una conducta del sujeto activo del delito y la destrucción, disminución o estado de peligro con que esa conducta afecta al bien jurídico tutelado por la ley.

Por lo tanto cuando el agente llena el supuesto de la norma y

produce un resultado material o jurídico, el delito se ha consumado.

En cuanto a los delitos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, la doctrina más generalizada sostiene que si bien carecen de la intención delictuosa sí merecen la represión punitiva, porque encuadran dentro de los ilícitos calificados por el resultado, porque no hay delitos culposos de mera conducta o formales, lo cual implica que por ese resultado que lesiona algún bien jurídico, corresponde su regulación al Derecho Penal, y no a otras ramas del mismo, como lo son el Civil o el Administrativo.

Ahora el elemento principal para la consumación de los delitos culposos, lo es la causación del resultado típico, que califica o hace antijurídica una conducta que nació lícita.

Por lo tanto los delitos culposos se consuman cuando se produce un resultado típico, causado por una conducta que no solamente se encuentra ligada a dicho resultado, sino que le ha dado vida en forma material, encontrándose íntimamente vinculados la conducta con el resultado, a través del nexo causal, en virtud de que sin la presencia de la primera jamás acontecería el segundo; traduciéndose la conducta como el único medio idóneo generador del resultado material y antijurídico.

Por eso el delito culposo requiere de un estudio lógico deductivo, porque preocupa a la colectividad a partir de la producción de un resultado material, y será entonces cuando se busquen las causas de dicho desenlace, mediante un juicio aposteriori, fundado siempre en que la culpa carece de toda intención y propósito de provocar un menoscabo.

Lo anterior tiene sus raíces en una omisión no consentida por el agente, sin embargo el resultado lesivo que acontece inevitablemente lo coloca como un sujeto que ha violado lo establecido por el Derecho y por lo tanto debe ser sancionado.

CAPITULO III

DELITOS IMPRUDENCIALES QUE SE PUEDEN COMETER CON MOTIVO DEL TRANSITO DE VEHICULOS

LESIONES

La palabra lesión, proviene del latín LAESIO-LAEDERE-HERIS, su significado equivale a daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad, esto es causar a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

DEFINICION LEGAL

La etimología del ilícito en análisis, permite pasar al concepto legal del mismo, y con el objeto de señalar una definición acorde a este estudio, es de tomar en cuenta lo establecido por el Código Penal vigente, para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal.

Lo anterior, en principio a que el Derecho Penal debe ser actual, en cuanto a su aplicación, luego entonces se sanciona a un sujeto de conformidad con la Legislación Penal vigente. Así para que una persona sea procesada por algún ilícito, es necesario antes que dicho delito esté debidamente tipificado, en la Legislación Penal como una conducta antijurídica.

Dicho lo anterior no nos es posible pormenorizar en una definición doctrinal a través de los años, en virtud de que se sanciona de conformidad con el texto vigente contemplado los Ordenamientos Penales.

Lo expuesto da fundamento a lo que se ha venido diciendo, esto es, "no habrá delito sin ley", esto nos recuerda el dicho "Todo lo que no está prohibido, esta permitido"; por ello considero como definición correcta del delito de Lesiones la vertida en el artículo 288 del Código Penal para el Distrito Federal, al decir:

Art.288 "Bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa".

Aunque tal definición puede resumirse en estas palabras, "lesión es toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa". Toda vez que las escoriaciones, fracturas, etc. implican de alguna manera una alteración en la salud y al enumerarlas, más que una definición, resulta ser todo un concepto médico legal de daño de lesiones siendo extensa e imprecisa, pues

al pormenorizar en determinadas situaciones médicas como las anotadas el concepto se vuelve amplio, variante y exclusivo de ciertas situaciones.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

En el estudio de cualquier delito es importante para el litigante, desintegrar en elementos el tipo penal para ubicar la existencia de los presupuestos a llenar por la conducta antijurídica realizada y formular su defensa, combatiendo así cada uno de estos, con alguna causa de justificación, o bien con una excusa absolutoria. Así de la definición legal anotada, se desprenden como elementos constitutivos del delito de lesiones:

- a) Toda alteración en la salud.
- b) Que dicha alteración deje huella material en el cuerpo humano.
- c) Que sea producida por causa externa.

Al fraccionar el concepto del delito en análisis, se observa la ausencia de la lesión Psicológica que se causa a la víctima, la cual es materia de la Reparación del Daño, esta ausencia cuando menos se denota del segundo de sus elementos del concepto, pues al señalar "que dicha alteración deje huella material en cuerpo humano", y la lesión a veces aparente no deja huella material en el cuerpo humano; y aunque es difícil establecer en la

definición de este delito, esa inquietud, pues se tendría a bien incluir lo relativo a la fuerza física o moral que repercute en forma de impacto psicológico en la víctima.

CLASIFICACION DE LAS LESIONES

ATENDIENDO EL GRADO MORAL

Con respecto a este delito, para que una conducta sea considerada como delictuosa, no es suficiente el daño en la salud, ni la seguridad de que es consecuencia de una causa externa, ni así mismo la comprobación de un nexo causal entre la conducta como causa y la lesión como efecto, además es necesaria la existencia del elemento moral, esto es que las lesiones sean imputables a una persona de haberlas causado de manera dolosa o culposamente.

De acuerdo con el elemento moral, el maestro González de la Vega, las agrupa así:

1. Lesiones intencionales
2. Lesiones por imprudencia, y
3. Lesiones causales

1. LESIONES INTENCIONALES.- Estas se presentan cuando el agente se ha propuesto su realización, en concordancia con

ello señala el artículo 9o. del Ordenamiento Penal en cita, "la intención delictuosa se presume. salvo prueba en contrario".

2. LESIONES POR IMPRUDENCIA.- Este delito se consuma cuando ha quedado comprobado que la alteración en la salud y el daño en el cuerpo se debe a "la existencia de un estado subjetivo de imprudencia que se traduce al exterior en acciones u omisiones imprevisoras, negligentes, imperativas, irreflexivas o faltas de cuidado".

3. LESIONES CAUSALES.- Estas lesiones se encuadran claramente en el artículo 15 fracción X del Ordenamiento penal en cita al señalar "causar un daño por mero accidente, sin intención ni imprudencia alguna, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas".

A este tipo de lesiones no se les puede clasificar como delitos, debido a la falta del elemento subjetivo.

Existen diversas maneras de clasificar las lesiones, así destacados autores nos hablan de lesiones levisimas, lesiones leves, lesiones graves y mortales, otros adoptan el criterio anterior omitiendo la lesiones levisimas.

Por su parte el concepto genérico legal contiene una clasificación que parte de la norma jurídica, plasmada en los siguientes artículos:

Art. 289.- Primera parte, Lesiones que tardan en sanar menos de quince días, y no ponen en peligro la vida, algunos las llaman lesiones levisimas.

Art. 289.- Segunda parte, Lesiones que tardan en sanar más de quince días y no ponen en peligro la vida, también llamadas lesiones leves.

Art. 290.- Lesiones que dejan cicatriz en la cara perpetuamente notables.

Art. 291.- Lesiones que provocan disfuncion parcial y permanente de un organo.

Art. 292.- Lesiones que provocan disfuncion total y definitiva o pérdida anatómica de un organo.

Art. 293.- Lesiones que ponen en peligro la vida, también llamadas lesiones graves.

La clasificación anterior es basta y suficiente, en virtud de abarcar todos los supuestos del ilícito en estudio, así toda alteración en la salud producida por una causa externa llenará el presupuesto establecido en el numeral 288, del concepto genérico, del delito.

Con respecto a las lesiones producidas con motivo del tránsito de vehiculos. se indica que en el Distrito Federal siempre serán culposas y van a ser perseguibles por

querella, de conformidad con el artículo 62 del Código de esta entidad, que señala:

Art. 62.- "... Cuando por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos se causen lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, sólo se procederá a petición del ofendido o de su legítimo representante, siempre que el conductor no se hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, y no se haya dejado abandonada a la víctima".

LA QUERELLA EN LAS LESIONES

Independientemente de tratar lo relativo a la denuncia, querella y acusación, en el capítulo siguiente, es necesario señalar un concepto sencillo de la querella, que facilite un mejor entendimiento del delito en análisis, respecto de su persecución.

"QUERELLA.- Es una manifestación de voluntad, de ejercicio potestativo, formulada por el sujeto pasivo u ofendido con el fin de que el Ministerio Público tome conocimiento de un delito, no perseguible de oficio, para que se integre la

Averiguación Previa correspondiente y en su caso se ejercite la Acción Penal" (1).

Es de tomar en cuenta, que no se necesita ningún requisito de formalidad para la procedencia de la querella, basta con manifestar ante el Agente del Ministerio Público, el deseo aunado con el derecho que le asiste al sujeto pasivo para que se castigue al responsable de un ilícito, causado en su agravio.

Así "cuando la ley exige la querella para la persecución de un delito, basta (para su existencia) que el ofendido concorra ante la Autoridad competente puntualizando los hechos en que hace consistir el delito (Suprema Corte de Justicia, Jurisprudencia definida Quinta Epoca, número 241)".

Sólo éste requisito de procedibilidad, facultará al Agente del Ministerio Público, para ejercitar Acción Penal así es en estos delitos, independientemente de que al ocurrir un hecho de tránsito concorra el representante de la sociedad y al desarrollar su trabajo investigue los hechos, en

(1) Osorio y Nieto, César Augusto. La Averiguación Previa. p. 22.

virtud del interés público que siempre predomina, toda vez que por lo regular las lesiones van acompañados de otros ilícitos de este orden.

La forma de persecución de las lesiones en el Distrito Federal, cuando son ocasionados con motivo de tránsito de vehículos se contempla un beneficio que asiste a los conductores inmiscuidos en un hecho de este orden, a diferencia con el Estado Libre y Soberano de México, donde su Legislación Penal y contiene mínimos beneficios en favor de quienes por culpa cometen delitos imprudenciales, siendo muy limitado el beneficio, por cuanto refiere al delito de lesiones, restringiéndose exclusivamente a aquellas que tardan en sanar hasta quince días y no ameritan hospitalización; y las comprendidas en los artículos 235 fracción I y II, 238 fracción I, de su Ley Punitiva.

La diferencia entre la Entidad Mexiquense con el Distrito Federal, en cuanto a las Lesiones cometidas con motivo de tránsito vehicular, se puede observar en los artículos mencionados:

Art. 235.- "Al inculpado del delito de lesiones que no pongan en peligro la vida se impondrán:

- 1.- De tres días a seis meses de prisión o de tres a treinta y cinco días multa o ambas penas, cuando el ofendido tarde en sanar hasta

quince días inclusive y no amerite hospitalización. Este delito se perseguirá por querrela; y

II.- De cuatro meses a dos años de prisión y de cinco a ciento cincuenta días multa, cuando el ofendido amerite hospitalización o las lesiones tarden en sanar más de quince días".

Art. 238.- Se impondrán al autor de las lesiones, además de las penas anteriores:

I.- De seis a dos años de prisión y de tres a ciento cincuenta días-multa, cuando las lesiones dejen al ofendido cicatriz notable y permanente en la cara, o en uno o ambos pabellones auriculares".

LA PUNIBILIDAD DEL ILICITO

Si la Legislación Penal ofrece un tipo específico que la sociedad reconoce como conducta antijurídica, entonces ya tenemos un tipo delictivo, luego cuando una conducta se manifiesta en el mundo exterior y se identifica al llenar los presupuestos del ilícito, y por lo tanto contraria al Derecho, aunado a que el sujeto activo del delito posea

capacidad legal, entonces la conducta será antijurídica e imputable, por lo tanto le corresponde una penalidad.

Luego entonces una conducta es punible cuando por su naturaleza amerita ser penada, por ende el Derecho se concretiza al imponer la pena correctiva, y así también cuando sea la pena la que deba imponerse por la violación del Orden Jurídico, será en ese acto cuando el Derecho se perfeccione, toda vez que dicha pena es coercible dado el Imperio del Orden Jurídico Vigente en nuestro país. De esta manera las normas de tipo penal, incluyen sus propias penas y la imposición de las mismas se hará en forma coercible, después de que quien ha de sufrirlas ha sido oído y vencido en juicio; así el Derecho se perfecciona, al encuadrar primero una conducta al tipo penal, hasta la imposición de la pena.

Por otro lado la Legislación Penal para el Distrito Federal previene un capítulo especial para la aplicación de las penas a los delitos de este orden, y es el capítulo II del delito Título III, del Ordenamiento Penal en cita en donde se contemplan diversas situaciones de los delitos imprudenciales, incluyendo en este contexto los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos de transporte escolar y de servicio público, federal o local entre otros.

Propiamente es el artículo 62 del Código Penal en estudio, el que contiene el criterio aplicado a los conductores involucrados en algún hecho automovilístico.

Respecto a estos delitos, nuestra la Legislación Penal vigente da un trato al delito imprudencial causado con motivo del tránsito de vehículos, con atenuada penalidad; indiscutiblemente el tratamiento para estos ilícitos es muy positivo, en virtud de que los conductores en el momento de ponerse al volante de sus vehículos, no imaginan siquiera, tampoco tienen el afán de atropellar o privar de la vida a una persona ni causar daño alguno, sino que su único objetivo directo es el uso de su automóvil para transportarse; de ahí la evidencia de que tanto la imprudencia como la negligencia al momento de manejar, encuadran en una ausencia de lo que es el dolo. Siendo por lo tanto los hechos de este orden culposos.

HOMICIDIO

Los conductores en el momento de abordar su vehículo de motor, deben tomar todas las precauciones necesarias, para realizar la maniobra de conducir su automóvil, porque el delito más grave que se puede cometer es el homicidio, y ocurrirá ante un descuido, falta de atención o cualquier otra imprudencia.

En el orden de los delitos de tránsito ocupa un alto número el homicidio este es el resultado de una lesión mortal, y podemos privar de la vida a una persona por mero accidente, sin la intención ni imprudencia alguna, ejecutando un hecho lícito con todas la precauciones debidas; dándose estas muertes a cada instante día con día y a causa del tránsito de vehículos.

DEFINICION LEGAL

La definición del homicidio contenida en la Legislación Penal para el Distrito Federal, permite analizar el delito en estudio en forma general y en particular hablando propiamente del homicidio cometido con motivo del tránsito de vehiculos, así pues se señala el siguiente apartado:

Art. 302.- "Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro".

Este concepto abarca todo tipo de definiciones que pudieran sugerirse, en virtud de que todas coinciden en el punto vital, el privar de la vida.

El tipo penal de este ilícito pretende proteger la vida humana, que puede ser afectada en forma dolosa, culposa imprudencial y de manera preterintencional.

El delito de homicidio cometido con motivo del tránsito de vehículos, no se sanciona con las mismas penas o reglas comunes y aplicables a los delitos intencionales o preterintencionales, sino que tiene establecida una sanción determinada en el artículo 60 del Ordenamiento Penal en referencia.

Estadísticamente hablando se puede hacer un análisis de la culpa en el delito de lesiones y homicidio cometidos con motivo del tránsito de vehículos, encontrando como causas principales que ocasionan estos ilícitos son:

1. Exceso de velocidad y por lo tanto desacato a las disposiciones de los Reglamentos de Tránsito.
2. Fallas mecánicas del automóvil.
3. Manejar en estado de ebriedad y el influjo de algunas sustancias psicotrópicas.
4. El alza o baja de la presión arterial del conductor, que se traducen en negligencia, impericia, imprevisión, falta de cuidado o de reflejos. no obstante ocupa un gran porcentaje la imprudencia del peatón.

No es extraño encontrarse a diario con sucesos en los cuales perecen uno o varios transeúntes en las calles de la ciudad. producidos por un atropello. choque. caída de un vehículo en movimiento u otras circunstancias, en las que se vean involucrados los conductores de los automóviles;

como resultado de una lucha constante entre el peatón y el conductor, en el que tanto uno como otro tratan de ganarse mutuamente el paso para llegar a sus destinos en este tren de vida diaria.

Lo anterior no es otra cosa que una clara ausencia de educación vial, y conciencia ciudadana por respeto a la vida, y hoy en día cruzar una calle o avenida significa como se ha dicho por ahí "dar paso a la muerte", porque todo ser humano sabe que sale de su domicilio, pero nunca está seguro si volverá con bien a su hogar.

La Legislación Penal Mexicana en este tipo de delitos siempre protege al peatón. lo cual se considera es prudente, en atención a su desventaja frente al conductor de un vehículo de motor. por ello en la práctica siempre se trata de encuadrar la negligencia, la imprudencia, etc., en el conductor, sin observar si existe mucha o poca culpa en el peatón.

Coincide con el criterio anterior la Jurisprudencia de la sexta Época, segunda parte, la cual reza:

IMPRUDENCIA. DELITO POR. Y CULPA AJENA.- "En los delitos imprudenciales, la culpa ajena que concurre a la producción del daño causado juntamente con la del inculcado no exonera a éste de responsabilidad penal".

Otra tesis relacionada indica:

IMPRUDENCIA. CONDUCTORES DE VEHICULOS.- "Aun cuando la víctima, por parte del peatón haya sido imprudente al tratar de pasar de una acera a otra a media cuadra, esta imprudencia no excluye la responsabilidad del reo, quien falta al reglamento de tránsito en dos aspectos, al manejar en estado inconveniente y a velocidad no permitida". (Sexta Época, segunda parte, vol. XXV, pág. 62 A.D., 7690/58, Abel Luna Campos 5 votos) (2).

DE LA PUNIBILIDAD EN ESTOS DELITOS

El Código Penal para el Distrito Federal, contempla respecto a la sanción aplicable a estos ilícitos un capítulo especial y propio para los delitos culposos o imprudenciales, específicamente en sus artículos 60 y 61, que a continuación se transcriben:

Art. 60.- "Los delitos imprudenciales se sancionarán con prisión de tres días a cinco años y suspensión hasta de dos años, o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio.

Cuando a consecuencia de actos u omisiones imprudenciales, calificados como graves, sean imputables al personal que

(2) Apéndice del Semanario Judicial de la Federación. Tesis 157. p. 323.

preste sus servicios en una empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera o de cualesquiera otros transportes de servicio público federal o local, se causen homicidios de dos o más personas, la pena será de cinco a veinte años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Igual pena se impondrá, cuando se trate de transporte de servicio escolar.

La calificación de la gravedad de la imprudencia queda al prudente arbitrio del Juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 52, y las especiales siguientes:

- I. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó.
- II. Si para ello bastaba una reflexión o atención ordinaria y conocimientos comunes en algún arte o ciencia.
- III. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes.
- IV. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidados necesarios.
- V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, tratándose de infracciones cometidas en los servicios de empresas transportadoras, y en general por conductores de vehículos, y
- VI. En caso de preterintención el Juez podrá reducir la

pena hasta en una cuarta parte de la aplicable, si el delito fuera intencional".

Art. 61 .- "En los casos a que se refiere la primera parte del primer párrafo del artículo anterior, las penas por delito de imprudencia, con excepción de la reparación del daño, no excederán de las tres cuartas partes de la que corresponderían si el delito de que se trata fuera intencional.

Siempre que al delito intencional corresponda sanción alternativa que incluya una pena no corporal, aprovechará esa situación al delincuente por imprudencia".

La doctrina moderna sostiene la necesidad de acudir a sanciones reducidas y no propiamente penales para los delincuentes culposos o imprudenciales, pues su conducta obedece a un defecto psicológico que reduce la capacidad de previsión de atención, y la suspensión como la privación de derechos constituyendo penas paralelas. Y es el Juez quien deberá elegir entre ambas, en uso de su libre albedrío que le confiere la ley, según se trate de culpa con representación o culpa sin representación.

El Juez decíamos, para aplicar la sanción correspondiente a los responsables de los delitos imprudenciales con motivo del tránsito de vehículos deberá hacerlo con base en los peritajes en materia de tránsito terrestre y demás,

rendidos por los peritos auxiliares de la justicia. así también deberá tomar en consideración la personalidad del sujeto activo, su peligrosidad, los motivos del delito, los daños morales y materiales causados por el mismo, el peligro corrido por el ofendido o por el propio delincuente, la calidad del primero y sus relaciones con el segundo y las circunstancias de ejecución del hecho.

Según se desprende del análisis del artículo 62. quedan comprendidas en éste las penas para los delitos de lesiones y homicidio cometidos con motivo del tránsito de vehículos. De esta manera las sanciones establecidas en los artículos 289, 290, 291, 292, 293 y 307 de la regla general que corresponden a los delitos de lesiones y homicidio no serán aplicables, cuando sean cometidos con motivo de la circulación de vehículos, pero serán tomados en cuenta para efectos del artículo 61 del Código Penal en cita.

Así también, con el objeto de prevenir los delitos contra la vida y la integridad personal por los conductores de servicio público Federal o Local, quienes al transportar gran número de pasajeros los cuales les confían sus vidas y seguridad, su responsabilidad crece, por lo tanto tienen la obligación de conducir con extremo cuidado y precaución debida para hacerlos llegar a su destino, de lo contrario y si por un descuido provocan lesiones u homicidio, se harán acreedores a penalidades exuberantes, que ni se

imaginan. Sin embargo considero seria prudente hacerles saber a través de un curso educativo.

El beneficio otorgado a los automovilistas que manejan dentro del Distrito Federal y se vuelven delincuentes por circunstancias no deseables se muestra reducido con relación al tratamiento que da el ordenamiento penal para el Estado de México, respecto de los delitos de lesiones u homicidio cometido entre parientes y con motivo del tránsito de vehículos, donde en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias el Estado decide no aplicar sanción alguna con base en la valoración del daño, en el presunto, responsable, al establecer:

Art. 65.- "No se impondrá pena alguna a quien por culpa y con motivo del tránsito de vehículos en que viaje en compañía de su cónyuge, concubina, hijos, padres o hermanos, ocasione lesiones u homicidio alguno o algunos de éstos".

Como se ve el beneficio otorgado por esta entidad a los conductores de vehículos inmersos en un hecho de tránsito, es de adoptarse por la Legislación Penal para el Distrito Federal, toda vez que en la situación del tránsito vehicular no se pretende lesionar ni privar de la vida a ninguna persona, sino únicamente transportarse a sus respectivos destinos, por lo que indudablemente en los

delitos culposos o imprudenciales ocasionados en este orden hay ausencia de dolo y de la capacidad de entender y querer un resultado lesivo.

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA

Por lo regular con motivo del tránsito de vehículos, concurren en un solo acontecimiento, tanto el delito de homicidio como lesiones, daño en propiedad ajena y omisión de auxilio en algunas ocasiones.

Generalmente las causas penales por estos delitos responden en sus encabezados a "lesiones, homicidio y daño en propiedad ajena", sin embargo aunque estos delitos por lo regular van de la mano, también pueden suscitarse de manera independiente.

ANTECEDENTES DEL ILICITO

El significado de la palabra daño tiene una apreciación elástica como menoscabo, dolor, molestia, algunas veces figura como la idea de destrucción o simple deterioro; claro en materia penal la palabra daño se restringe en su significado, toda vez que el jurista distingue entre daño y perjuicio, y no acepta la igualdad entre el daño causado a las personas en su salud, con el daño causado en su patrimonio.

El maestro Francisco González de la Vega, propone para esta figura delictiva como denominación correcta "daño en las cosas", repudiando la utilizada en el Ordenamiento Penal en cita. La razón de su proceder la fundamenta en que este delito también puede cometerse en bienes propios.

CONCEPTO LEGAL

El tipo que describe la conducta del ilícito en análisis, se encuentra previsto en el artículo 399. del Cuerpo de Leyes en referencia:

"Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones de robo simple".

Se considera es muy amplio este concepto, toda vez que abarca tanto situaciones que van desde el movimiento de tránsito, hasta el delito intencional de daño en propiedad ajena.

Algunos autores consideran que el daño a la propiedad ajena cometido en forma culposa no es punible, basándose en la teoría que expone "para que exista tal figura delictiva es necesario el elemento *Animus Nocendi*", el cual se basa fundamentalmente en el odio y la venganza.

El maestro Eusebio Gómez se pronuncia por este criterio al

señalar "el daño culposo no es punible, por la razón que expone el mismo maestro Carrancá la de ser criterio esencial del delito en examen, el ánimo de causar injuria tomada esta palabra en sentido amplio de ataque al derecho ajeno. además escribe este autor en los delitos que tienen solamente por objeto el derecho de propiedad, la imputabilidad política de la culpa no se puede adquirir porque para prever a la seguridad privada basta la reparación civil, aparte de la opinión que la seguridad no se conmueve por estas lesiones del derecho, cuando proceden de mera imprudencia" (3).

Una característica imprescindible de procedibilidad de este delito es la presentación de la querella de la parte ofendida o de su legítimo representante, así el artículo 399 bis, del Ordenamiento Penal que se ha venido citando establece:

"Los delitos de abuso de confianza y daño en propiedad ajena siempre se perseguirán a petición de la parte ofendida".

Se considera es propio el llamamiento de la parte ofendida o interesada en su caso, la cual ha de indicar si desea que

(3) Gómez, Eusebio. Tratado de Derecho Penal. Tomo I y II.

persiga o no el delito. pues se presta a llegar a un arreglo particular con el sujeto activo del ilícito y evitarse así un largo procedimiento a efecto de que le paguen su daño. Esto da cabida a un dicho muy conocido el cual reza "mas vale un mal arreglo que un buen juicio".

PUNIBILIDAD DE ESTE ILÍCITO.

El artículo 62 del Código Penal para el Distrito Federal, señala dos supuestos con respecto al daño en propiedad ajena, un general y otro particular referido a los delitos imprudenciales ocasionados con motivo de la circulación, veamos su contenido al respecto:

Art. 62. "... Cuando por imprudencia se ocasione únicamente daño en propiedad ajena que no sea mayor del equivalente a cien veces el salario mínimo, se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de ésta. La misma sanción se aplicará cuando el delito de imprudencia se ocasione con motivo del tránsito de vehículos cualquiera que sea el daño"

En realidad el sujeto activo, en este ilícito no revela ninguna peligrosidad que lo identifique como delincuente, y agente nocivo para con la sociedad, sin embargo un descuido traducido en una imprudencia, que es punible

conforme a la Legislación Penal y por la cual ha de responder ante la sociedad.

Creo que un acto de esta naturaleza, no debe ser privativo de libertad del responsable, en virtud de la falta de entendimiento y deseo en la conducta del agente para obtener un resultado lesivo, sobre todo cuando es causado con motivo del tránsito de vehículos.

En esta clase de daños prácticamente el Ministerio Público carece de facultades para intervenir, hasta en tanto no sea llamado, de manera que el ofendido en un delito culposo de esta naturaleza habría de quedar a merced de sus pobres recursos para pelear civilmente en contra del imprudente que dañe sus bienes, para buscar la reparación del daño.

La culpa delictuosa en este caso es claramente punible y dañina, además de que la institución del Ministerio Público se ha instituido en la mayoría de los lugares que se requiere y es de su competencia la persecución de los delitos, y entre sus funciones se encuentra la de constituirse en representante de la comunidad. Empero el requisito de procedibilidad ofrece satisfactorios resultados, cuando hay disposición de los sujetos activo y pasivo de un delito de esta índole, para llegar a un nuevo arreglo.

Tratando en específico el delito de daño en propiedad ajena

ocasionado con motivo de la circulación de vehículos, se tiene:

De acuerdo con el Ordenamiento que se ha venido citando, el delito en estudio se encuentra previsto y sancionado de manera general en los artículos 397, 398, 399 y 399 bis, sin embargo el precepto legal 62 de este cuerpo de leyes, establece las excepciones a lo establecido en los numerales de referencia, conteniendo la reglas para los delitos en particular de daño en propiedad ajena cometido a causa del tránsito de vehículos, el artículo en comento contiene otra excepción respecto de lo señalado en el artículo 60 del mismo Ordenamiento Penal, el cual contiene el criterio aplicable a los delitos de imprudencia en general. Regulándose por separado el delito de daño en propiedad ajena culposo y el mismo causado de manera dolosa.

ATAQUES A LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION

Este delito, es cometido con frecuencia por los conductores de vehículos, y se encuentra previsto y sancionado en el título V, capítulo I del Código Penal para el Distrito Federal, en sus diversas modalidades, para este estudio se rige por lo establecido en los artículos 167 fracciones II, VI y VII, 171 fracción I y II Y 172.

Se hace alusión a sus modalidades en virtud de que este

ilícito presenta diversas situaciones, que pueden ser constitutivas del delito en estudio, como se desprende del artículo 166 del Ordenamiento Penal en cuestión, aunque estas situaciones dejan ver claramente el dolo, sin embargo para el caso que nos ocupa sólo enunciaré lo referente al que pueda surgir con motivo de culpa y por causa de la circulación de vehículos.

Importa señalar que el Código Penal en cita, eleva a la categoría de ilícitos la reincidencia en las faltas e inobservancia de las disposiciones del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal.

Constituyen el delito de Ataques a las Vías Generales de Comunicación lo establecido en los artículos que nos ocupan, en sus respectivas fracciones que a continuación se transcriben:

Art. 167. "Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de quinientos a cincuenta mil pesos:

II. Por el simple hecho de romper o separar un alambre, alguna de las piezas de máquinas, aparatos, transformadores, postes o aisladores empleados en el servicio telegráfico, telefónico o fuerza motriz.

VI. Al que interrumpiera la comunicación telegráfica

o telefónica, alámbrica o inalámbrica, o el servicio de producción o transmisión de alumbrado, gas, energía eléctrica, destruyendo o deteriorando uno o más postes o aisladores, el alambre, una máquina o aparato de un telégrafo, de un teléfono, de una instalación de producción, o de una línea de transmisión de energía eléctrica.

VII. Al que destruya todo o parte, o paralice por otro medio de los especificados en las fracciones anteriores, una máquina empleada en un camino de hierro, o en una embarcación, o destruya o deteriore un puente, un dique, una calzada o camino, o una vía: y

VIII. Al que con objeto de perjudicar o dificultar las comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad".

Art. 171. "Se impondrá prisión hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador:

I. Al que viole dos o más veces los reglamentos o disposiciones sobre el tránsito y circulación de

vehículos en lo que se refiere al exceso de velocidad.

- II. Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los Reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas".

El artículo anterior claramente expresa lo relativo a la violación de dos o más veces las disposiciones de los reglamentos de tránsito, con lo cual se denota que dos o más infracciones en un mismo sentido pueden elevarse a la categoría de delito. Por lo que es suficiente para configurar el delito de ataque a las vías generales de comunicación que un sujeto conduzca su vehículo de motor, en estado de ebriedad y con exceso de velocidad de la permitida por los reglamentos citados.

El criterio adoptado para el Distrito Federal en estos supuestos sólo implica una infracción administrativa, y para el caso de reincidencia puede ser penalizado.

Por otro lado el criterio que sigue el Estado Libre y Soberano de México es diferente al anterior, toda vez que se concibe como delito el conducir un automóvil en estado de ebriedad, sin hacer alusión si viola o no

disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes de la Entidad o a su Reglamento, basta la situación que se señala; agravándose la pena para el caso de conducir vehículos de transporte público de pasajeros, de transporte escolar o de transporte de personal en servicio.

No se duda que quien maneje en estado de ebriedad ó bajo el influjo de drogas y estupefacientes, no infrinja las disposiciones sobre el tránsito, por ello creo que la Legislación Penal para el Estado de México es buena en este sentido, sin embargo no estoy de acuerdo con los largos procedimientos que se llevan a cabo, donde al cumplir todas las formalidades de todo procedimiento penal, no cumple el cometido de la impartición de Justicia de ser pronta y expedita.

Creo que no tienen sentido extremosos procedimientos para determinar la responsabilidad del delincuente en estos supuestos, en virtud de que si el tiempo se redujera en gran medida, se estaría cumpliendo con el cometido Constitucional, sin olvidar que en atención a la cuantía de la pena, esta es suceptible de conmutarse de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente de la legislación penal mexicana:

Art. 73 "Cuando se trate de delincuentes primarios, que hayan observado buena conducta con anterioridad al

delito tengan modo honesto de vivir y no se haya sustraído a la acción judicial durante el procedimiento. la pena de prisión no exceda de dos años. podrá ser conmutada por el Juez por la de tres a noventa días multa. En caso de insolvencia se sustituirá por trabajo en favor de la comunidad".

Por otra parte y con respecto al estado de ebriedad, se tiene:

Anteriormente el ya derogado artículo 90 del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal establecía la diferencia entre aliento alcohólico y ebriedad completa al señalar "se prohíbe a toda persona conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias estupefacientes los vehículos a que se refiere el presente Ordenamiento. Para los efectos de este Reglamento. se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando tenga 0.08 grados o más de contenido alcohólico en la sangre".

Hoy en día se limita a no tocar en ningún momento el grado de alcohol en la sangre. llenando el presupuesto del artículo el solo aliento alcohólico. constituyendo un ataque a las Vías Generales de Comunicación, según se desprende del artículo 15 del actual Reglamento para la entidad en cita. el cual establece lo siguiente:

"La persona que al conducir cualquier tipo de vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, será sancionado con arresto incommutable de 12 a 36 horas, impuesto por el Juez Calificador de la jurisdicción correspondiente. La aplicación del presente artículo, se hará sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrirse".

Por último para la configuración de este delito es necesario se presenten los elementos a saber:

1. Conducir un vehiculo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes u otras sustancias.
2. La violación de dos o más disposiciones de los Reglamentos de Tránsito, al hacer circular el automovil.

Tanto la ley como la jurisprudencia consideran el manejar en estado de ebriedad como un delito intencional en contra de las Vías Generales de Comunicación, según se desprende de la jurisprudencia siguiente:

"ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION. CONDUCCION DE VEHICULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD ES INTENCIONAL.- Las circunstancias de haberse encontrado el acusado en estado de ebriedad, no le resta la característica de intencional al delito de Ataque a las Vías de Comunicación, ya que uno de los elementos constitutivos de tal infracción, prevista y sancionada por el artículo 171, fracción II del Código

Penal, es el estado de ebriedad elemento material del delito que no encierra en sí mismo una excluyente de responsabilidad, puesto que la intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario y la misma se remonta al inicio de la intoxicación alcohólica, en la que las facultades volitivas se encuentran en condiciones normales" (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Vol. 66, 2a. Parte, Junio 1974 Primera Sala, pág. 16)" (4).

ABANDONO DE PERSONAS U OMISION DE AUXILIO

El delito de abandono de personas, de conformidad con lo dispuesto por el Código Penal para el Distrito Federal, reviste en cinco formas distintas, a través de las cuales se configura, el ilícito:

- I. Abandono de hogar,
- II. Abandono de niños,
- III. Omisión de auxilio a los que se encuentran en peligro,
- IV. Abandono de víctimas por atropellamiento, y
- V. Exposición de menores.

De todas ellas es de interés para este análisis lo referente al abandono de víctimas por atropellamiento.

(4) Gallart y Valencia, Tomás. Delitos de Tránsito. p. 101.

Señala el siguiente precepto del Ordenamiento en cita:

Art. 341. "El automovilista, motorista, conductor de un vehículo cualquier, ciclista o jinete que deje en estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia, a persona a quien atropelló por imprudencia o accidente, será castigado con la pena de uno a dos meses de prisión".

Tanto en la Ciudad de México como en otros Estados de la República, los conductores de vehículos tienen como primera reacción después de atropellar a una persona, emprender a la fuga, reacción que obedece al temor, falta de valor civil o valor humano. Situación que los pone en desventaja ante la ley, para obtener su libertad bajo caución, en caso de ser asegurados y puestos a disposición de la autoridad investigadora.

No es la fuga o la huida del conductor lo que se sanciona, sino el hecho de dejar en el abandono al sujeto lesionado. Y la ley castiga el incumplimiento del deber jurídico surgido por la conducta imprudencial del sujeto obligado, o por el mero descuido en el cual ha sido infortunado actor y es claro que dicha omisión es representada y aceptada.

De esta manera la norma hace específica relación al deber cuya omisión integra el delito, el cual puede cumplirse

auxiliando directamente a la víctima. en el lugar del atropellamiento o en sitio diverso. o bien facilitándole la asistencia de un tercero cuando ello se imponga como necesario; o simplemente que no se dé a la fuga.

COMENTARIOS

Hoy en día el automóvil se ha convertido en sinónimo de la necesidad de transportarse rápidamente a diversos lugares. lo que ha tenido como consecuencia se incrementa el número de los delitos ocasionado con motivo del tránsito de vehículos, dando origen a largos procedimientos por sencillos o diminutos que fuesen los acontecimientos en cualquiera de los ilícitos de este orden.

Para una pronta administración de justicia en estos ilícitos es necesario se cuente con una legislación penal que contenga una serie de procedimientos especiales, los cuales no observen minuciosos trámites, y que ofrezcan eficaces soluciones, ya sea favorables o en contra de los involucrados, pero siempre en favor de la sociedad.

Con relación a los delitos no intencionales o de imprudencia deben ser sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código Penal para el Distrito Federal, no descartando la idea de que se adicionara este precepto legal con algunas excusas absolutorias en casos muy especiales como lo hace la Legislación Penal para el Estado de México en su artículo 59.

Lo anterior en virtud de que el sujeto activo en casos especiales tiene a bien sufrir una doble pena a

consecuencia de un delito. por una parte la pena moral que lo atormenta y por otro lado la pena impuesta por el Estado. Sobre todo cuando intervienen lasos de sangre, de amistad y de gratitud entre los ofendidos y el sujeto activo.

Por último se ampliara en el Ordenamiento Penal para el Estado de México. la querella como requisito de procedibilidad en todas las lesiones ocasionadas con motivo del tránsito de vehículos.

CAPITULO IV

LA AVERIGUACION PREVIA EN LOS DELITOS COMETIDOS
CON MOTIVO DEL TRANSITO DE VEHICULOS

CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

Para no entrar en detalle de esta figura, el concepto más adecuado para este estudio es el siguiente:

"El Ministerio Público es el Organó del Poder Ejecutivo a quien incumbe la persecución de los delitos, debiendo además velar por la observancia de las leyes de interés general e intervenir en todos aquellos asuntos que afectan a la sociedad y al Estado y en general a las personas a quienes las leyes otorgan especial protección" (1).

La sociedad en uso de su Soberanía le ha concedido al Estado el derecho para encargarse de la protección y la tutela de sus bienes jurídicos en general. Así el Estado siempre se ha preocupado por cumplir con la defensa de los valores de la colectividad, y ha conferido al Agente del Ministerio Público, por conducto del Poder Ejecutivo la misión de representar en todos sus actos a la sociedad ofendida por el delito, para el cumplimiento de ese cometido, el Organó

(1) Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Artículo 1o.

Ministerial cuenta con las facultades suficientes para constituirse en Representante Social y por tanto perseguidor de los delitos cometidos en contra de la sociedad.

Siendo el Agente del Ministerio Público el encargado de perseguir los delitos, en su calidad de representante de la sociedad y quien integra a su vez la Averiguación Previa, es menester agregar que es una institución dependiente del Poder Ejecutivo (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federación y en el Distrito Federal y Gobernadores en los Estados). Siendo medular indicar que posee un doble carácter, de autoridad durante la preparación del proceso, en el desarrollo del mismo y el juicio. Los actos que realiza durante el primer periodo, son formal y materialmente administrativos, puesto que depende del Poder Ejecutivo (bajo un criterio formal) y al realizarlos aplica su propia actividad (bajo un criterio material).

Su origen se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al señalar:

Art. 21 "...la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel".

De acuerdo con la evolución de las Instituciones Sociales, se le han otorgado al Agente del Ministerio Público diversas facultades para cumplir con su cometido, teniendo injerencia

organismo. auxiliado debidamente por la Policía Judicial misma que está bajo su mando inmediato.

AVERIGUACION PREVIA

En principio trataré esta figura de manera general, en seguida con relación a los delitos de este estudio, esto es la Averiguación Previa con motivo de tránsito de vehículos.

A continuación mencionaré algunos conceptos de esta figura con el objeto de buscar el mejor respecto de esta efigie.

"La Averiguación Previa es un procedimiento que no pertenece al proceso, sino equivale al cúmulo de actos que corresponde realizar al Ministerio Público durante su función investigadora" (2).

"La Averiguación Previa puede definirse como la etapa procedimental durante la cual el Organó investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar en su caso el Cuerpo del Delito y la Probable Responsabilidad, y optar por el Ejercicio o abstención de la Acción Penal" (3).

(2) Díaz de León, Marco A. Código Federal de Procedimientos Penales Comentados. p. 2.

(3) Osorio y Nieto, César A. La Averiguación Previa. p. 2.

en diversas ramas del Derecho, de esta manera puede fungir como representante del Estado cuando se afecten los intereses de éste (Derecho Administrativo), de igual manera en cuestiones de tutela social, en materia civil protegiendo las relaciones del orden familiar, así vemos su intervención en los divorcios, sucesiones, nombramiento de tutores o curadores, enajenación de bienes de menores o incapaces, y transacción acerca de sus derechos, informaciones Ad Perpetuum, y cuando se afecten derechos o bienes de un ausente y en general, representar todos los intereses jurídicamente tutelados por el Poder del Estado, de igual manera lo conducente al Derecho Penal.

Respecto de la conformación de la institución en cita, la Constitución General de la República en sus artículos 21 y 102, no señalan sino meras facultades específicas del mismo sin organizarlo propiamente, por ello es menester apoyarse en Leyes y Ordenamientos secundarios, por ejemplo la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Entidad en la cual se encuadra esta investigación, de igual manera cada Estado de la República tiene su propia Ley Orgánica y sus respectivos Reglamentos de organización.

Por otro lado la facultad de perseguir los delitos que posee esta institución se madura durante la Averiguación Previa, la cual es una investigación secreta llevada a cabo por este

Colín Sánchez indica: "La Averiguación Previa es la etapa procedimental en que el Ministerio Público en ejercicio de la facultad de Policía Judicial, práctica todas aquellas diligencias necesarias que le permitan estar en aptitud de ejercitar la Acción Penal, debiendo integrar para esos fines el Cuerpo del Delito y la Presunta Responsabilidad" (4).

Considero que la Averiguación Previa, es la etapa en la cual el Ministerio Público asistido de la Policía Judicial, de conformidad con las facultades que le confieren las leyes, se avoca durante su función investigadora a la realización de todas las diligencias necesarias para acreditar los extremos del Cuerpo del Delito y de la Presunta Responsabilidad, concluyendo con el Ejercicio, o no Ejercicio de la Acción Penal.

Durante esta etapa investigadora el Ministerio Público al ser enterado a través de una denuncia, una querrela o acusación, aunque también existe la iniciación de la Averiguación Previa de oficio, de conformidad con lo establecido por los artículos 113 y 262 de los Códigos de Procedimientos Federal y para el Distrito Federal respectivamente, y aunque estos preceptos son claramente violatorios del artículo 16

(4) Colín Sánchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. p. 443.

constitucional. toda vez que de acuerdo con este último, la Averiguación Previa solamente puede ser iniciada previa denuncia, acusación o querrela. Respecto de algunos hechos que encierren un probable delito, siguiendo con la idea, el representante social realizará todo tipo de diligencias, auxiliado por los elementos de la Policía Judicial, y peritos en las diversas materias, hasta lograr su determinación final, que será ejercitando o no Acción Penal, o bien enviando la Averiguación a Reserva o al Archivo. misma que apuntaré más adelante.

La Averiguación Previa se desarrolla en un lugar administrativo, ante el Agente del Ministerio Público, abriéndose con ella el trámite procedimental, debiéndose llenar los requisitos de procedibilidad. Así pues al levantarse el acta correspondiente, entre otros datos debe contener el lugar y número de la Agencia Investigadora, fecha, hora, nombre del Ministerio Público en turno, número de la Averiguación y cada una de las actuaciones del Ministerio Público y sus auxiliares, todas estas reunidas en orden cronológico debidamente foliadas, iniciando con la narración de los hechos que motivaron a levantar el acta.

Tomando en cuenta lo anterior, creo necesario definir la denuncia, la querrela y la acusación.

LA DENUNCIA

La denuncia "es el acto procedimental que sirve para motivar la investigación de los delitos perseguibles de oficio, se manifiesta como la comunicación o exposición de la noticia, de la comisión de un delito, hecha por el sujeto pasivo del ilícito o por un tercero, a los órganos competentes".

Para Osorio y Nieto, "es la comunicación que hace cualquier persona al Ministerio Público de la posible comisión de un delito perseguible de oficio" (5).

Por mi parte considero que, la denuncia es el medio legal por el cual se hace del conocimiento de la autoridad competente una relación de actos que se estiman delictuosos, que la Ley Penal castiga como delito, siempre y cuando sean de aquellos que por disposición de la misma ley sean perseguibles de oficio.

Del concepto anterior se desprenden los siguientes elementos de la denuncia:

1. Una relación de hechos o actos que se estiman delictuosos,
2. Realizada ante el órgano investigador, y
3. Hecha por cualquier persona inclusive el ofendido.

(5) Osorio y Nieto, César Augusto, op. cit. p. 7.

La denuncia puede realizarse en forma verbal o por escrito, desde luego si es verbal se hará constar en un acta que levantará el Ministerio Público recabando al final de la narración de los hechos la firma o dactilograma de la persona quien la presentó.

Si la denuncia se hace por escrito, el funcionario que la reciba deberá cerciorarse de la identidad del denunciante, y de la autenticidad de los documentos en que apoya su denuncia, dando fé de los mismos y levantando el acta correspondiente, así también realizará todas las diligencias necesarias, citando a los presuntos responsables y en su caso solicitar al Juez las ordenes de presentación o de aprehensión en contra de éstos, en su caso girada a la Policía Judicial para el cumplimiento de la mismo. A fin de recabar los elementos suficientes que lleven a la comprobación del Cuerpo del Delito y la Presunta Responsabilidad, recabando por último la firma o dactilograma del quejoso.

La denuncia surte sus efectos en términos generales, al obligar al órgano investigador a que inicie la Averiguación Previa correspondiente, observando los requisitos de legalidad, fundando y motivando la investigación, siguiendo paso a paso los lineamientos señalados en la ley respectiva.

NATURALEZA JURIDICA DE LA DENUNCIA

Antes de abordar el tema de la naturaleza jurídica de la denuncia es menester saber, si es obligación para cualquier ciudadano el hacer del conocimiento de la autoridad los delitos, o bien una facultad potestativa o en su caso un deber jurídico.

Con relación a esta inquietud, Manuel Rivas Silva, considera que la obligación de presentar una denuncia es parcial y no absoluta pues si hablamos de obligatoriedad se requiere para ello en caso de no hacerlo, de la aplicación de una sanción, de esta manera cuando el legislador desea que no se cometa un acto fija para ello una sanción a la comisión del mismo.

Conforme a lo anterior creo que no existe la obligación de presentar denuncia de hechos por cualquier persona que tenga conocimiento de ellos, toda vez que no puede haber obligación sin sanción; por otro lado la omisión de la denuncia no puede ser constitutiva de delito de encubrimiento como lo afirman algunos juristas, ya que de acuerdo con la doctrina el criterio más aceptado con relación al encubrimiento es necesario que los actos de favorecimiento sean positivos.

Sin embargo fuera de las situaciones señaladas se considera que la denuncia es un deber de toda persona y su justificación radica en la protección del interés general y

el conservar la paz y el convivio social.

LA QUERELLA

Doctrinalmente el concepto de querella es variado, dando los estudiosos del Derecho diversos conceptos a saber:

Expone Colín Sánchez "querella es un derecho potestativo que tiene el ofendido por el delito, para hacerlo del conocimiento de las autoridades y dar su anuencia para que sea perseguido" (6).

El maestro Arilla Bas, considera a la querella "como la relación de hechos constitutivos del delito, formulada ante el Ministerio Público por el ofendido o su representante, pero expresando la voluntad de que se persiga" (7).

Mientras para Osorio y Nieto, "querella es una manifestación de voluntad de ejercicio potestativo, formulada por el sujeto pasivo o el ofendido con el fin de que el Ministerio Público tome conocimiento de un delito no perseguible de oficio, para que se inicie e integre la Averiguación Previa correspondiente y en su caso ejercite la acción penal" (8).

(6) Colín Sánchez, Guillermo. op. cit. p. 241.

(7) Arilla Bas, Fernando. El Procedimiento Penal Mexicano. p. 53.

(8) Osorio y Nieto, César A. op. cit. p. 22.

En si la querella es un requisito de procedibilidad y debe satisfacerse para que el Ministerio Público pueda iniciar la Averiguación Previa del caso concreto, o consignar hechos en caso de haberla integrado.

De conformidad con el concepto dado con el jurista Arilla Bas, misma que se adopta para este estudio por ser de las más completas, y de ésta se desprenden los siguientes elementos:

1. Una relación de hechos delictuosos constitutivos de delito. Esta se realiza de manera verbal o por escrito, donde el querellante ha de imputarle a una persona en específico si lo sabe y pedir se castigue al presunto por el delito que se reclama, haciendo una exposición de los hechos en los que hace consistir su querella.
2. Que esta relación se haga ante el Ministerio Público, por conducto de la parte ofendida o su representante, lo anterior, en virtud de la existencia del interés particular que es más importante que el agravio sufrido por la sociedad en la comisión de ese tipo de delitos, y en este caso no resulta eficaz el actuar del órgano persecutor de los ilícitos de manera oficiosa, toda vez que pueden causarse mayores daños a la víctima del delito.
3. Que se exprese el deseo o la voluntad por el sujeto pasivo o su representante de que se persiga y castigue al

autor del delito.- Con la querella se manifiesta ese deseo, empero debemos recordar la característica de los delitos perseguibles a petición de parte, esto es que se extingue con el perdón del ofendido la Acción Penal, por ello es imprescindible manifestar desde luego que no se otorga el perdón ya sea en forma expresa o tácita, aunque generalmente tiene que ser expresa.

NATURALEZA JURIDICA DE LA QUERELLA

Severas polémicas se han suscitado acerca de esta figura jurídica, algunos juristas a favor y otros en contra de la institución en cita donde incluso se pronuncian por su desaparición de los ordenamientos penales.

Carlos Binding, se pronuncia en contra de los partidarios de la querella, y señala "cuando el Estado delega facultades en manos de particulares y el delito no se castiga, ya sea porque el querellante no presenta su queja en tiempo o porque está en manos de un representante inactivo, aquella no alcanza su objetivo y la justicia sufre una lesión. Además el que se deja en manos de un particular la persecución de un delito, propicia la inmoralidad en la administración de justicia" (9).

(9) Colín Sánchez, Guillermo. op. cit. p. 142.

En este orden algunos otros autores señalan la ineficacia de la figura que nos ocupa y señalan que si es más grande el interés de los particulares que el de la sociedad, deberían desaparecer del Código Penal los delitos perseguibles a petición de parte ofendida.

Sin embargo estos tratadistas se olvidan de la crueldad de las consecuencias que trae consigo la persecución de algunos delitos, en cuanto se refiere al daño moral o al daño psicológico, para la víctima del ilícito. Por ejemplo hablemos de los delitos de violación y de estupro, donde la publicidad puede dañar más al sujeto pasivo que la no persecución del mismo.

Es por ello que el seguimiento de varios delitos, es dejado al libre albedrío de los particulares.

En lo personal me pronuncio, en favor de esta figura jurídica, donde lejos de desaparecer en las legislaciones penales se ha hecho patente en delitos que anteriormente se perseguían oficiosamente. Prueba de lo anterior lo es la reforma al Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, en fecha 16 de febrero de 1971, con relación a la persecución de los delitos culposos con motivo del tránsito de vehículos, los cuales ahora se persiguen a petición de parte en los siguientes casos:

1. Cuando se cause unicamente daño en propiedad ajena, cualquiera que sea el monto.
2. Cuando se causen lesiones de las comprendidas en los artículos 289 y 290 del Código Penal en cita.
3. Cuando se causan ambos resultados de daño en propiedad ajena y lesiones de las mencionadas.

En todo caso la persecución por querrela en estos supuestos ya mencionados, queda condicionada a que el sujeto activo, no se encuentre en estado de ebriedad, o bien bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias que provoquen efectos similares.

Posteriormente con las reformas de 1986 al ordenamiento punitivo para el Distrito Federal, se extendió la querrela en los supuestos anteriores, a los delitos de lesiones, cualquiera que sea su naturaleza.

DELITOS PERSEGUIBLES A PETICION DE PARTE

De conformidad con el Código en análisis, se encuentran los siguientes:

1. Daño en propiedad ajena y lesiones, art. 62.
2. Peligro de contagio entre conyuges, art. 199 bis.
3. Estupro, art. 262.
4. Rapto, art. 271.

5. Adulterio. art. 274.
 6. Abandono de conyuge. art. 337.
 7. Lesiones de la parte primera del art. 289 de este Cuerpo de Leyes.
 8. Calumnias y difamación. art. 360.
 9. Fraude. que no exceda de 500 veces el salario mínimo.
 10. Abuso de confianza. art. 399 bis.
 11. Ejercicio indebido del propio derecho, art. 226.
- Y los demás que determine el Código Penal.

QUIENES PUEDEN PRESENTAR LA QUERELLA

A este respecto alude el Código en cuestión lo siguiente:

Art. 264 "... se reputará parte ofendida para tener por satisfecho el requisito de querella necesaria. a toda persona que haya sufrido algún perjuicio con motivo del delito y tratándose de incapaces. a los ascendientes y a falta de éstos a los hermanos o los que representen a aquellos legalmente".

La querella puede ser presentada por cualquier persona física o moral de conformidad con lo establecido en el precepto legal anterior. De esta manera las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser formuladas por Apoderado que tenga Poder General para pleitos y cobranzas con cláusula especial, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificación

del Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios o Accionistas, ni Poder Especial, para el caso concreto.

Para las querellas formuladas por personas físicas, será suficiente un Poder semejante, salvo en los casos de rapto, estupro o adulterio, en los que sólo se tendrá por presentada cuando se haga directamente por alguna de las personas a que se refiere la parte final del párrafo primero de este artículo en cita.

Habiendo señalado lo necesario de la denuncia y la querella, nos resta definir la acusación como "la imputación directa que se hace a una persona determinada de la posible comisión de un delito, ya sea perseguible de oficio o a petición de parte ofendida, hecha por la víctima o el lesionado directamente".

DIFERENCIAS ENTRE DENUNCIA QUERELLA Y ACUSACION

En principio la denuncia puede ser presentada por cualquier persona, siempre y cuando el delito por disposición de la ley, sea de los perseguibles de oficio. Inclusive por el propio ofendido, quedando en este supuesto envuelta la querella dentro de la denuncia.

Por su parte la querella puede ser presentada solamente por el ofendido o su legítimo representante, en la comisión de un

delito perseguible por disposición de la ley de los castigados a petición de parte, que menoscabe sus intereses y manifieste además el deseo de que se persiga al responsable del ilícito.

Con relación a la acusación, ésta se encuentra propiamente en concordancia con la denuncia y la querella, pues esta al ser la imputación directa a un sujeto de la comisión de un delito perseguible de oficio o por querella, ante el Ministerio Público investigador sólo se vuelve un medio directo de hacer responsable a alguien en específico de un ilícito.

Por otra parte la querella presenta una característica fundamental que la hace diferente de la denuncia, esto es que en los delitos perseguibles a petición de parte ofendida se puede otorgar el perdón, definido este como "la manifestación expresa de la voluntad en virtud de la cual se hace patente el propósito del ofendido de que no se castigue al infractor" (10).

Por lo tanto en los delitos que se persiguen por querella el perdón del ofendido, otorgado durante la Averiguación Previa y hasta antes de pronunciarse la sentencia, y siempre y que

(10) Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal. p. 115.

sea aceptado por el presunto responsable. extinguirá la Acción Penal para el delito que se persigue. No pudiendo el Ministerio Público continuar excitando el Órgano Jurisdiccional. esto es cesa el derecho de persecución por parte del Estado. en específico de un delito más no la facultad de perseguir los ilícitos.

Es importante no confundir el perdón del ofendido con el consentimiento del mismo. por el simple transcurso del tiempo y no presentar su querella en cierto lapso. Pues mientras el consentimiento en nuestra materia se entiende como el medio previo al nacimiento de la intervención del Ministerio Público. pues este órgano inicia su actividad con la querella. en caso de que ésta no exista por el consentimiento otorgado. no puede aparecer la acción penal ni la fase preparatoria de la misión.

El simple transcurso del tiempo sin el perdón y sin el consentimiento técnicamente hablando lo que produce es la preclusión del derecho a querellarse que trae consigo la extinción de la pretensión punitiva.

Juridicamente se justifica el comentario mencionado. toda vez que el consentimiento es anterior al nacimiento de la acción. es por ello que al no hacerlo no habrá persecución del infractor. mucho menos el perdón del ofendido.

El Código Penal referido. cita en estos términos la extinción

del derecho para presentar su querella el ciudadano:

Art. 93 "El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo. extingue la acción penal respecto de los delitos que solamente pueden perseguirse por querella. siempre que se conozca antes de pronunciarse sentencia en segunda instancia y el reo no se oponga a su otorgamiento.

Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón solo surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga.

El perdón sólo beneficia al inculcado en cuyo favor se otorga a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo. hubiese obtenido la satisfacción de sus intereses o derechos. caso en el cual beneficiará a todos los inculcados y al encubridor".

Art.107 "Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres fuera de esta circunstancia.

Pero si llenado el requisito inicial de la querella, ya se hubiese deducido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio".

Habiendo esclareciendo de los medios de hacer del conocimiento del Ministerio Público la existencia de un delito y necesarios para iniciar Averiguación Previa, continuaremos en un mayor pulular de la averiguación.

La trascendencia de la averiguación previa no sólo consiste en dar inicio al procedimiento penal, sino que constituye la base principal sobre la cual descansará el proceso.

Así mientras la defensa pretenderá desvirtuar el Cuerpo del Delito y la Presunta Responsabilidad, el Agente del Ministerio Público en su carácter de representante de la sociedad ratificará en todo momento lo que consideró su homologo en Averiguación Previa como en el procedimiento penal.

Es en la Averiguación Previa donde el Ministerio Público debe acreditar el Cuerpo del Delito como la Presunta Responsabilidad, para así ejercitar o no la Acción Penal en contra del presunto responsable, es por ello que no se debe pasar por alto el análisis de tan importantes figuras.

CUERPO DEL DELITO

Cuerpo del delito "Es considerado el conjunto de elementos relacionados con la comisión de un delito para fincar la posible responsabilidad, que constituyan la materialidad de la figura delictiva descrita por la Ley".

Cuerpo del Delito "Es la prueba de la existencia del quebrantamiento de la Ley; todo objeto que sirva para hacerlo constar. La materialidad de la infracción. El conjunto de los elementos materiales que forman el delito. Comprende, no sólo los elementos físicos cuyo concurso es indispensable para que la infracción exista, sino también los elementos accesorios que se refieren al hecho principal, particularmente las circunstancias agravantes, como la efracción las amenazas, las violencias, etc. Es pues tanto la persona o cosa en quien se concreta la realidad objetiva del delito, como todas las manifestaciones exteriores que tengan una relación más o menos inmediata con la infracción" (11).

En otras palabras el Cuerpo del Delito no es otra cosa que la transgresión-tipo, así pues en el homicidio el Cuerpo del Delito lo constituye el cuerpo de occiso por la acción u

(11) García Ramírez, Sergio. Prontuario del Proceso Penal Mexicano. p. 190.

omisión voluntaria de un sujeto activo, de esta forma si no hay cadáver no puede haber homicidio, tampoco Cuerpo del Delito, en este sentido desde luego.

Al Cuerpo del Delito se le han dado tres acepciones diferentes. Algunos entienden que el Cuerpo del Delito, es el delito mismo. Otros estiman que el Cuerpo del Delito se encuentra constituido por el conjunto de elementos materiales e inmateriales que comprenden la definición legal. Terceros autores opinan que el Cuerpo del Delito consiste exclusivamente en los elementos materiales.

Sin embargo es propio considerar que el Cuerpo del Delito está dado por la adecuación del acto u omisión que encaja perfectamente en la descripción del tipo legal hecha por el Legislador, en las que muchas veces se incluyen elementos de carácter moral.

COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO

Antes de pasar a la comprobación del Cuerpo del Delito es menester señalar como se integra el mismo, para tal efecto abundaré en que se hace reuniendo todos los elementos que se desprenden del tipo penal, esto es durante la Averiguación Previa, el Ministerio Público con apoyo de la Policía Judicial se avocará a reunir esos elementos, allegándose de todos aquellos vestigios, como pruebas materiales de la

perpetración de un delito, mismos que se deberán hacer constar en la averiguación correspondiente, de donde dependerá el Cuerpo del Delito.

Para la comprobación del Cuerpo del Delito es necesaria una actividad racional, consistente en determinar si la conducta tiene o no cabida dentro de la hipótesis de la norma penal, lo cual implica un proceso valorativo de adecuación con el tipo penal correspondiente.

El Código Federal de Procedimientos Penales, describe que el Cuerpo del Delito se tendrá por comprobado cuando esté justificada la existencia de los elementos materiales que constituyen el hecho delictuoso, según lo determina la Ley penal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto considera:

"CUERPO DEL DELITO. COMPROBACION DEL: Comprobar el Cuerpo del Delito, es demostrar la existencia de un hecho, con todos sus elementos constitutivos tal como lo define la ley, al considerarlo como delito y señalar la pena correspondiente. Cuando en la resolución de la Autoridad no se cite el precepto legal, cuya infracción se imputa al acusado, no existe una base firme para preciar si ha quedado legalmente probado el delito que se atribuye, toda vez que precisamente, es el precepto que se estima violado, el que debe determinar

cuales son los elementos que constituyen el delito (quinta época, tomo XXIX, pág. 1566, Laphma Arturo F., 1a. Sala, Apéndice de Jurisprudencia 1975, segunda parte, pág. 202, 3a. relacionado de Jurisprudencia "Cuerpo del delito, concepto de" Tesis 93, pág. 201)" (12).

No hay que olvidar que la regla genérica para la comprobación del Cuerpo del Delito consiste en probar la existencia de su materialidad separando los elementos materiales de los que no lo son, en la definición contenida en cada tipo legal.

Por otro lado, ha quedado claro que corresponde primero acreditar el Cuerpo del Delito y la Presunta Responsabilidad al Agente del Ministerio Público, y el Juez de la Causa determinará la comprobación de ambas, esto es la autoridad judicial que tenga conocimiento de la causa penal a través de la instrucción del Juicio, mediante el examen de las diligencias de Averiguación Previa y las realizadas dentro del Término Constitucional, así como las probanzas ofrecidas y desahogadas dentro del proceso penal hasta la audiencia final para resolver de una forma fehaciente la existencia o ausencia del Cuerpo del Delito o de la Presunta Responsabilidad.

(12) Jurisprudencia y Tesis sobresalientes 1974-1975. p. 355.

LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD.

La Presunta Responsabilidad es el deber jurídico en que se encuentra el individuo imputable , mismo que debe dar cuenta a la sociedad de su comportamiento negativo.

Existe la presunta responsabilidad cuando hay elementos suficientes para suponer que una persona ha tomado parte en la concepción de un acto típico, por lo cual debe ser sometida un proceso penal.

De igual manera se acredita cuando se presentan determinadas pruebas, por las cuales se pueda suponer la responsabilidad de un sujeto, o simplemente cuando existan indicios o sospechas que hagan presumir, racionalmente que una persona pudo haber tenido intervención en el delito que se le atribuye.

En la práctica generalmente cuando el Agente del Ministerio Público una vez que se tiene acreditado el Cuerpo del Delito, para la comprobación de la Presunta Responsabilidad, basta que haya indicios o sospechas de que el presunto responsable participó tuvo injerencia en los hechos delictivos, esto es para efectos de las determinaciones del Agente del Ministerio Público. Más no ocurre así con la determinación del Juez de la Causa, quien debe fundar y motivar debidamente su resolución con apego a la Ley. con la demostración plena de

la responsabilidad del sentenciado.

DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO

Las determinaciones del Ministerio Público, son las siguientes:

1. Ejercicio de la Acción Penal.
 - a) Con detenido
 - b) Sin detenido.
2. No Ejercicio de la Acción Penal o Resolución de Archivo.
3. Reserva.
4. Desistimiento de la Acción Penal.

1. EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

En principio "la Acción Penal es el poder jurídico de excitar y promover la decisión del Órgano Jurisdiccional sobre una determinada relación de Derecho Penal. Y el Ejercicio de la Acción Penal consiste en la actividad que se despliega con tal fin".

De acuerdo con la doctrina más generalizada la Acción Penal es el poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional a fin de que el juzgador pronuncie acerca de la punibilidad de hechos que el titular de aquella reputa como constitutivos de delito.

La Acción Penal es una acción pública ejecutada en representación del Estado por el Ministerio Público, y cuyo fin es la aplicación de una ley penal. Por ello ante el conocimiento de un delito el Representante Social práctica de oficio el Ejercicio de la Acción Penal una vez comprobados los elementos típicos del delito, no quedando al capricho de ningún particular.

Por último la Acción Penal en términos generales es de condena, pero al mismo tiempo declarativa, toda vez que se encausa a obtener la declaración de responsabilidad penal sobre el sujeto activo del delito.

a) EJERCICIO DE LA ACCION PENAL CON DETENIDO

Ya dijimos que el Ejercicio de la Acción Penal se traduce como el conjunto de actividades realizadas por el Agente del Ministerio Público ante el Organo Jurisdiccional, con la finalidad de que a la postre pueda declarar el Derecho en un acto que el persecutor de los delitos considera como delictuoso.

Cuando el sujeto y presunto responsable del delito ha sido detenido en flagrante delito, la Averiguación Previa se integra y se consignan las actuaciones del Ministerio Público, al Juez de la Causa, y será éste último donde en el Auto de Radicación examinará si la consignación reúne los requisitos de legalidad del artículo 16 constitucional, en

caso afirmativo, decretará la detención del consignado, se dice decretará, aunque éste ya se encuentre detenido o privado de su libertad, porque es la única decisión que justifica esa privación de libertad, declarada en el Auto Constitucional.

De lo contrario si no aparecen reunidos los elementos típicos del delito o los requisitos constitucionales, el Juez deberá ordenar la inmediata libertad del consignado.

b) EJERCICIO DE LA ACCION PENAL SIN DETENIDO

En este caso el Organó Persecutor de los delitos, habiendo reunido los requisitos del artículo 16 constitucional y siempre que la penalidad del ilícito, no sea corporal, sino alternativa, ejercitará Acción Penal sin detenido y solicitará al Juez de la Cuasa gire orden de aprehensión o de comparecencia por el delito que se imputa al inculcado y será el Juez quien decida el concederla o negarla, en sus respectivos casos si la consignación reúne los requisitos de legalidad.

2. DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL O RESOLUCION DE ARCHIVO

Recordemos que el Ministerio Público es una Institución de buena fé y obra en la misma forma y su función no es la de

perseguidor sistemático del procesado, sino como un Representante de la Sociedad y su gran interés se basa en promover los principios de justicia y el castigo del culpable o la declaración de su inocencia.

Por ello al practicar las diligencias necesarias y reunidos los requisitos legales, hará su consignación, pero si agotadas éstas, no se logran reunir los elementos constitutivos del delito, porque de los hechos se desprende que no se configura ningún ilícito el Ministerio Público ordenará el no Ejercicio de la Acción Penal enviando su resolución al Archivo.

La determinación anterior ha sido muy objetada, debido a que el Organo Investigador no tiene facultades jurisdiccionales para declarar la no existencia del delito. Pero se ajusta a los preceptos de la Constitución en el sentido en que los datos que arroja la Averiguación Previa deberán ser bastantes para comprobar la existencia del Cuerpo del Delito y de la Presunta Responsabilidad. De lo contrario conllevará al Ministerio Público al no Ejercicio de la Acción Penal conforme a la Ley.

La resolución de Archivo, en términos generales consiste en un sobreseimiento administrativo al que el Derecho califica como resolución de no Ejercicio de la Acción Penal.

Una Averiguación Previa va ha dar al archivo en los

siguientes casos:

- a) Cuando los hechos no sean constitutivos de delito, y aún cuando pudiendo serlo, resulte imposible la prueba de su existencia, por decir la mediación del perdón del ofendido, en los delitos que se persiguen por querrela.
- b) Porque se comprobó la existencia de una excusa absolutoria, o de una causa de justificación como lo es la legítima defensa.
- c) Porque falleció el inculpado.

3. LA RESERVA

Respecto a las actividades del Ministerio Público en el Fuero Común, no existe reglamentación alguna pero con relación a la figura de la Reserva en el Fuero Federal el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales indica "si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se pueden practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la Policía Judicial que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

De igual manera establece el acuerdo 5/54 sobre la resolución

de la Reserva, la cual señala "cuando durante la Averiguación Previa, el presunto responsable no esté identificado, o no se haya perfeccionado el requisito de procedibilidad, o resulte imposible desahogar alguna prueba y las ya existentes no sean bastantes para justificar el Ejercicio de la Acción Penal o el no ejercicio de la misma, el Agente del Ministerio Público Federal actuará como sigue:

1. Comunicará al denunciante, querellante u ofendido, mediante oficio, el proyecto de resolución de reserva, solicitándole que aporte la mayor información que pueda proporcionar.

2. En el supuesto de que el denunciante, querellante u ofendido no aporte mayor información o si habiéndola presentado no es suficiente para continuar el trámite, porque subsista alguno de los supuestos arriba señalados, girará orden de investigación a la Policía Judicial Federal y dictará el acuerdo de reserva, fundado y motivado.

En consecuencia y como sabemos, supletoriamente son aplicables las normas y ordenamientos del Código Federal de Procedimientos Penales al Fuero de lo Común, por ello no es extraño que se envíen a la Reserva todas aquellas Averiguaciones Previas que por algún obstáculo transitorio no pueden integrarse los elementos legales. Aunque no debemos olvidar los términos judiciales, en virtud de que habiendo

transcurrido el tiempo de prescripción y el expediente de las actuaciones judiciales, aún no se integren los elementos típicos del ilícito porque faltan pruebas, quedarán sin efecto las acciones encaminadas al Ejercicio de la Acción Penal.

4. DESISTIMIENTO DE LA ACCION PENAL

Existen casos específicos donde la propia ley señala que el Agente del Ministerio Público debe abstenerse del Ejercitar Acción Penal en contra del indiciado, desistiéndose de la misma en los siguientes casos:

"1. Cuando durante el procedimiento resulte que los hechos no son constitutivos de delito; y

2. Cuando durante el procedimiento judicial aparezca plenamente comprobado en autos que el inculpado no ha tenido participación en el delito que se persigue, o que exista en su favor alguna causa excluyente de responsabilidad, pero solamente por lo que se refiere a quienes se encuentran en estas circunstancias.

Las resoluciones que se dicten en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, produzcan el efecto de impedir definitivamente el Ejercicio de la Acción Penal respecto de los hechos que los motiven.

Para que el desistimiento de la Acción Penal produzca el efecto señalado en el artículo anterior, deberá ser formulado expresamente y de acuerdo con los requisitos fijados en éste Código y en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Justicia del Estado de México" (13).

(13) Artículos 171 al 173 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. pp. 164-165.

COMENTARIOS

Es prudente mencionar en este apartado lo relativo a las diligencias realizadas por el Ministerio Público, con motivo de los delitos de tránsito de vehículos, con el objeto de integrar los elementos típicos del ilícito, y tener por comprobado el Cuerpo del Delito y la Presunta Responsabilidad, a fin de consignar a un Juez el producto de su Averiguación para que sea este último quien aplique el Derecho al Infractor.

De esta forma las diligencias más importantes y necesarias para que en un momento dado la Averiguación Previa arroje los elementos suficientes para acreditar tanto el Cuerpo del Delito como la Probable Responsabilidad, con relación a los ilícitos motivados por el tránsito de vehículos son a saber:

1. Iniciar la Averiguación Previa correspondiente,
2. Remitir de inmediato al o los conductores al perito Médico Legista con el objeto de que les dictamine su estado psicológico.
3. Realizar una sintensis de los hechos.
4. Tomar la declaración de quien proporciona la noticia del delito y atender el parte del policía remitente.
5. Practicar la inspección ministerial y dar fe de los manejadores, precisando su estado psicológico.

6. Recabar y agregar a la Averiguación el dictamen relacionado con el número dos de los señalados.
7. Recabar la declaración del ofendido, en los términos que deben observarse en los delitos perseguibles por querrela.
8. Tomar las declaraciones de los manejadores.
9. Recibir la declaración de los testigos.
10. Tener comunicación constante con los hospitales de traumatología para verificar que ya no haya lesionados relacionados con los hechos que se investigan.
11. Solicitar a los peritos en tránsito terrestre, en su caso peritos mecánicos, arquitectos, valuadores o los que en el evento concreto pudieren requerirse.
12. Recabar y agregar a la Averiguación el dictamen relacionado con el número anterior.
13. Realizar la inspección ministerial y dar fe de los vehículos y de los daños que presenten y otros bienes que pudiesen relacionarse con los hechos de la Averiguación Previa, tales como inmuebles, postes, semáforos entre otros.
14. Hacer la inspección ministerial y dar fe del lugar de los hechos, en que ocurrieron estos.
15. Dar su determinación al respecto de Consignar los hechos delictuosos. De la hipótesis de que se haya integrado el Cuerpo del Delito y la Presunta Responsabilidad, procederá a formular ponencia de consignación, en caso contrario dará lugar a cualquiera de las determinaciones

que la ley le confiera.

Todos los lineamientos expuestos, son los que la ley establece para los delitos con motivo del tránsito de vehículos.

De acuerdo con lo anterior, cuando el Ministerio Público investigador, en el momento que tiene noticia de que alguna persona ha sido lesionada con motivo de la circulación de automóviles, o haya perdido la vida, deberá integrar lo antes posible la Averiguación Previa correspondiente.

Tomando en cuenta las concepciones ya vertidas, y muy es especial las que tienden a integrar y tener por comprobado el Cuerpo del Delito, es posible analizar el delito de homicidio, el cual se comprobará de la siguiente manera:

1. Con la inspección ministerial y fe del cadáver.
2. Con el dictámen pericial médico que describa el cadáver,
3. Con la inspección ministerial del lugar de los hechos,
4. Con la inspección ministerial y fe del o los vehículos relacionados con los hechos delictuosos,
5. Con el dictámen pericial de criminalística de campo,
6. Con la confesional del sujeto activo y en su caso la testimonial si la hubiere; y
7. Con la pericial médica respecto de la autopsia.

En consecuencia, la integración del Cuerpo del Delito en el homicidio imprudencial cometido con motivo del tránsito de vehículos, se hará con el levantamiento de cuerpo por el Ministerio Público dando fe del mismo que está muerto, enseguida lo trasladará al Servicio Médico Forense, a fin de que se le realice la necropsia de ley, obteniendo el dictámen pericial correspondiente que describa el cuerpo del occiso y las causas que le dieron muerte, las cuales serán resultado de la acción típica, antijurídica y culpable.

Con respecto a la fe del vehículo y la inspección ministerial del lugar de los hechos, no resta importancia a las diligencias realizadas por el Ministerio Público, pues esto, dará al Juzgador los elementos suficientes para calificar el grado del imprudente conductor y el grado de temibilidad con relación a su descuido o negligencia al momento de conducir.

Por último es necesario aclarar que no es lo mismo el proceso que el procedimiento penal, así mientras el primero es el período de procedimiento que inicia con el acto de formal prisión, en tanto el segundo esta constituido por el conjunto de actos, vinculados entre sí por relaciones de causalidad y finalidad y regulados por normas jurídicas ejecutados por los órganos persecutorio y jurisdiccional, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones para actuar sobre el autor o partícipe de un delito con la conminación penal establecida en la ley.

Por lo tanto no es lo mismo el proceso que el procedimiento,
en virtud de que el primero es sólo una parte del segundo.

CAPITULO V

EXCUSAS ABSOLUTORIAS EN LOS DELITOS COMETIDOS CON MOTIVO
DEL TRANSITO DE VEHICULOS EN EL ESTADO DE MEXICO

NATURALEZA JURIDICA

Las Excusas Absolutorias engloban un beneficio, el cual se entiende de muy variadas formas, de conformidad con las ideas, costumbres y evolución de cada pueblo. De esta manera su apreciación obedece a la preocupación dominante en diversos ordenes, en función de la constitución de la familia; razón por la cual las excusas más reconocidas por el Derecho son cambiantes y evolucionan época con época y de pueblo en pueblo.

Las Excusas Absolutorias han sido denominadas con diferentes nombres, de tal suerte que se les identifica como "causas personales que liberan la pena", según Franz Von Litz, para M. E. Mayer y Kohler son consideradas como "causas personales que excluyen la pena" y para Luis Jiménez de Asúa causas de impunidad. Sin embargo cada una de las denominaciones que se vierten en torno a las excusas absolutorias, coinciden en esencia y convergen en un punto en común, el cual se trata de una figura jurídica que conserva latente los elementos del delito como una acción típica, antijurídica y culpable,

excluyendo la punibilidad, no aplicándose la pena correspondiente al presunto responsable, en razón de justicia y equidad de acuerdo con una prudente Política Criminal aplicable en cada pueblo.

CONCEPTO

Excusas Absolutorias.- "Son aquellas causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho, impiden la aplicación de la pena" (1).

Para Max Ernesto Mayer las Excusas Absolutorias.- "son circunstancias que conciernen a la persona del autor, que hacen que el Estado no establezca contra tales hechos sanción penal alguna" (2).

Mientras Jiménez de Asúa considera "como causas de impunidad o excusas absolutorias las que hacen que un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y culpable, no se asocie pena alguna, por razones de utilidad pública, es decir por motivos de impunidad" (3).

(1) Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. p. 278.

(2) Jiménez de Asúa, Luis. La Ley y el Delito. p. 443.

(3) Jiménez de Asúa, Luis. op. cit. p. 443.

Para mí muy particular punto de vista una Excusa Absolutoria es aquella circunstancia determinada por el legislador expresamente señalada en la Ley y que dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta, no permite la aplicación de la pena al sujeto, que ha cometido una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, por razones de justicia y equidad.

En lo particular coincido con el autor de este último concepto, toda vez que si el Estado no entra en decidir una situación de este orden, es por la existencia de una causa utilitaria de impunidad que es en lo que consiste la genuina Excusa Absolutoria.

CLASIFICACION

En atención a las causas que se estudian, el maestro Carranca y Trujillo hace de estas la clasificación que sigue:

- a) Excusas en razón de los móviles afectivos revelados;
- b) Excusas en razón de la copropiedad familiar (derogadas);
- c) Excusas en razón de la patria potestad o de la tutela (derogadas);
- d) Excusas en razón de la maternidad consciente;
- e) Excusas en razón del interés social preponderante; y
- f) Excusas en razón de la temibilidad específicamente, mínima, revelada.

Por su parte el maestro Castellanos Tena difiere un poco de la anterior clasificación y la agrupa de la manera siguiente:

- a) Excusa en razón de la mínima temibilidad;
- b) Excusa en razón de la maternidad consciente;
- c) Otras causas por inexigibilidad; y
- d) Excusa por graves consecuencias sufridas.

Respecto de la clasificación que hace el maestro Carrancá y Trujillo, se tiene, que las cuatro especies reconocen un común denominador, y éste es la "utilidad pública" o "utilitatis causa", que aconseja no imponer sanción alguna cuando a pesar de haber sido ejecutada una acción típica y antijurídica, y culpable, donde el presunto ha obrado en determinadas circunstancias y que hacen preferible el perdón legal antes que una mayor perturbación social que acarrearía la imposición de una sanción, cualesquiera que esta sea, constituyendo las Excusas Absolutorias en exámen, un perdón legal de la pena que corresponde al delito cometido.

EXCUSAS ABSOLUTORIAS QUE RECONOCE LA LEGISLACION PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL.

1. EXCUSA EN RAZON DE LOS MOVILES AFECTIVOS REVELADOS.

El Derecho mexicano acepta esta Excusa, en razón de las relaciones familiares, los lazos de sangre, el afecto, el amor y la comunidad familiar, justifican ante el Legislador

el actuar de un sujeto que a la vez muestra nula temibilidad, otorgándole así la excusa de la pena por varias razones, tales como:

Primero.- En razón al respeto a la integración familiar.

Segundo.- En razón a la consideración del legislador de no permitir se obligue a las personas que traicionen a un familiar bajo la amenaza de una pena.

Tercero.- Por causas de interés público.

Como ejemplo de lo anterior se tiene el delito de encubrimiento entre parientes y allegados, previsto y sancionado en el artículo 400 en sus fracciones III y IV, del Ordenamiento Penal en cita, las cuales indican:

Frac.III. "Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

Frac. IV. Requerido por las autoridades, no de auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes, y

No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al ocultamiento del infractor, y IV cuando se trate de:

- a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
- b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes

colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo; y

- c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto o gratitud, o estrecha amistad derivados de motivos nobles.

Esta Causa antes de las reformas de 1985 del Código en cuestión se le consideraba como un excluyente de responsabilidad, a pesar de ser una verdadera Excusa Absolutoria; ahora en la nueva redacción del artículo 400, en el inciso b y con la derogación de la fracción novena del artículo 15 del ordenamiento en cita, se le ha reconocido su verdadera naturaleza de Excusa Absolutoria.

Nótese como ahora el beneficio de la causa en estudio va más allá de las relaciones familiares, en virtud de extenderse el beneficio a los concubenarios y aquellos que mantengan lazos amistosos, de respeto, de gratitud y amorosos con el delincuente, derivados de los motivos nobles. Se suprimen por lo tanto las condiciones de no emplear algún medio delictuoso, ni mediar interés bastardo.

Respecto de esta Excusa, Castellanos Tena la ubica en el contexto de las excusas por inexigibilidad al señalar "igual fundamento opera para las excusas contenidas en los artículos 280 fracción II y 151 del Código Penal para el Distrito Federal".

Siendo así dos Excusas que contiene el ordenamiento penal en cuestión, la primera vertida en el artículo 280 que se refiere a la exención de la pena a determinados parientes cuando en un homicidio ocultan, destruyen, o sin la debida licencia sepultan el cadáver de un familiar.

Respecto de la Excusa en cuestión la doctrina le ha negado la verdadera naturaleza jurídica de Excusa Absolutoria, ubicándola en las causas de la no exigibilidad de otra conducta.

Sin embargo el ordenamiento penal que se analiza si la considera como eximente de responsabilidad, otorgando los beneficios correspondientes a los presuntos responsables.

La segunda Excusa Absolutoria se encuentra prevista en el artículo 151 del Cuerpo de Leyes en análisis, dispensa este artículo a ciertos familiares de un detenido, procesado o condenado, cuando favorezcan su evasión, excepto si proporcionan la fuga mediante violencia, en las personas o fuerza en las cosas.

2. EXCUSAS EN RAZON DE LA TEMIBILIDAD ESPECIFICAMENTE MINIMA

Para esta Excusa se encuentra lo relacionado con el robo de uso y el robo famélico o robo indigente tipificados en el Ordenamiento Penal en referencia, el primero en el artículo

375 y el segundo en el artículo 379:

Art. 375. "Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea restituído por el infractor espontáneamente y pague éste todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome conocimiento del delito no se impondrá sanción alguna, sino se ha ejecutado el robo por medio de la violencia".

Art. 379. "No se castigará al que, sin emplear engaños ni medios violentos se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento".

La Excusa del primer caso tiene su razón de ser, en que la restitución espontánea es una muestra objetiva de arrepentimiento y de la mínima temibilidad del agente.

Mientras en el segundo de los supuestos, encierra una causa de justificación, en donde existen dos intereses tutelados, esto es el derecho del necesitado de lo ajeno y que es de tanta importancia como la misma conservación de la vida, y el otro bien tutelado, el derecho de propiedad de los bienes. En estos casos es necesario que no se finja el estado de necesidad, pues de lo contrario no podrá configurarse dicha Excusa.

3. EXCUSA EN RAZON DE LA MATERNIDAD CONSCIENTE

La Legislación Penal en cita contempla los siguientes casos:

- a) Aborto causado por imprudencia de la mujer embarazada
- b) Embarazo resultado de una violación
- c) Aborto como estado de necesidad o aborto terapéutico

4. EXCUSAS POR GRAVES CONSECUENCIAS SUFRIDAS

De conformidad con la verdadera finalidad de la pena y por razones de una comprensión indulgente y humanitaria, se establece en el artículo 55, del Ordenamiento Penal en cita, una Excusa Absolutoria o perdón judicial:

Art. 55. "Cuando el agente hubiese sufrido consecuencias graves en su persona, que hiciere notoriamente innecesario e irracional la imposición de una privativa o restrictiva de libertad, el juez podrá prescindir de ella.

5. EXCUSAS EN RAZON DEL INTERES SOCIAL PREPONDERANTE

Esta excusa resulta como consecuencia del interés social vinculado con el derecho profesional o al ejercicio de una función pública, seriamente protegido por la ley penal en cita en el artículo 211. Como ejemplo encontramos que el

secreto profesional sea divulgado.

Es por ello que las autoridades no pueden obligar a las personas que con motivo de su profesión o encargo revelen secretos que les hayan confiado y hecho saber.

6. EXCUSAS EN CASOS DE INJURIAS, DIFAMACION Y CALUMNIA

Respecto de las calumnias, difamación e injurias por razones de interés social preponderante el legislador exime de pena alguna al sujeto activo en especiales circunstancias.

Claramente se denota que el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, es sumamente rico en Excusas Absolutorias, sin embargo en cuanto a hechos de tránsito se refiere resulta insuficiente con relación al Estado de México. Para tal efecto veamos el siguiente planteamiento.

ANALISIS DE LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS EN LOS DELITOS COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRANSITO DE VEHICULOS EN EL ESTADO DE MEXICO

Considero agotado casi en su totalidad el tema de esta tesis y cumplido el propósito que en un principio se planteó, en virtud de contar ya con todo un antecedente el cual permitirá el examen de las Excusas Absolutorias contempladas en la legislación penal para el Estado Libre y Soberano de México.

En este sentido deseo expresar que la inquietud por este tema comienza cuando en los hechos de tránsito de vehículos la persona ofendida o agraviada, puede ser una de tantas que el conductor vió por primera vez en su vida en el momento del penoso suceso, pero también suele suceder, y esto es muy común entre los automovilistas de vehículos particulares que la persona agraviada sea el amigo, el padre o aún los hijos mismos de este.

Cuando se lleva a cabo la Averiguación Previa motivada por un hecho de este estilo, mientras se toma la declaración del responsable del delito, paralelamente agoniza o perece en el puesto de socorros el amigo o el familiar amado. El conductor quisiera estar al lado de los lesionados facilitándole la curación a sus heridas y la pena que sufre es mayor por la desgracia acaecida de sus parientes o amistades que por el hecho de saber que irá a presidio.

Durante la Averiguación Previa, deberá determinarse con rapidez la inocencia o responsabilidad del sujeto activo. En caso de ser culpable el Juez estimará en su resolución de sentencia la pena correspondiente. Sin embargo si se tomará en cuenta el sentimiento humano, con un amplio sentido jurista, con toda seguridad se procuraría no aplicar al procesado pena alguna en virtud del daño sufrido. Por ser notoriamente innecesaria e irracional la imposición de la misma.

No obstante, lo anterior en los casos más desagradables como es el acaecimiento de familiares y estrechas amistades con motivo de algún hecho de tránsito, el sujeto activo del delito generalmente es procesado y en la mayoría de los casos resulta responsable, por lo tanto en su oportunidad es encarcelado y conminado por el Estado a purgar una pena privativa de libertad. Además de la pena moral que cae sobre su persona, resultando todavía más injusto cuando se causa el delito por mera imprudencia.

Sin embargo, pese a los argumentos expuestos estoy consciente de que somos juristas y no sociólogos o trabajadores sociales, por ello, con tal carácter nos corresponde ser elocuentes en este sentido y para lograrlo hecharemos mano a la Política Criminal, la cual promueve la necesaria reforma que da al Derecho un enfoque dinámico.

Creo prudente apuntar en este apartado lo necesario de la Política Criminal.

Se discute por algunos autores si la Política Criminal tiene o no el carácter de Ciencia, toda vez que carece de objeto y método propios, al grado de afirmar que la Ciencia y la Política son dos expresiones totalmente contradictorias.

Sin embargo la Política Criminal es de muy amplio contenido y es todo aquello capaz de combatir el delito antes o después de su ejecución.

La Política Criminal se traduce como el contenido sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena, según los cuales el Estado dirige la lucha en contra del delito por medio de la pena y de sus formas de ejecución, en virtud de consideraciones especiales que influyen sobre la Legislación Penal, donde se han dado los mas convenientes criterios impregnados de causas de utilidad pública y siempre tendientes a prevenir el delito.

Así pues se debe entender la Política Criminal en nuestro Derecho como "el contenido de consideraciones según las cuales en virtud de especiales relaciones que influyen sobre la legislación, deben ser dadas las más convenientes leyes penales".

Es muy cierto que la política criminal es cambiante, de acuerdo con la época y en relación con cada pueblo.

A principios de este siglo, habría sido absurdo hablar acerca de una Política Criminal referida a los delitos provocados con motivo del tránsito de vehículos. Sin embargo a la fecha las cosas han cambiado al grado tal que cuando un infante atraviese una calle detrás de su pelota, es muy probable encuentre su inmediata muerte, situación que no pasaba anteriormente, por ello es imprescindible es en este rubro contar con una Política Criminal especializada en los delitos

motivados por el tránsito de vehículos, medio por el cual se causan la mayoría de los ilícitos imprudenciales o culposos.

Así pues, pienso que en estos casos especiales operaría una Excusa Absolutoria en favor del responsable de un delito de ésta naturaleza, sobre todo cuando median lazos de sangre en línea recta ascendente y descendente o parientes por afinidad hasta un cierto grado, además aquellas personas que se encuentren ligados con el presunto por amor o gratitud.

Aunque parece ser demasiado amplio el contenido de una excusa de esta naturaleza, sin embargo solo obedecería a casos meramente especiales referidos a los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, debiéndose comprobar con un amplio criterio las circunstancias y móviles del ilícito para efectos de la no aplicación de la pena.

Lo anterior en virtud de que puede prestarse a prejuzgarse como resulta con todos los hechos de tránsito que suelen calificarse como imprudenciales o culposos, y aunque no se puede dudar que un gran número de hechos, en este orden sean cometidos dolosamente, aprovechando el delincuente el criterio tomado por el Legislador para estos casos.

Para disipar la duda que encierra la proposición anterior, he de analizar una excusa que contiene la Legislación Penal para el Estado de México con relación al tratamiento que da la Legislación Penal para el Distrito

Federal ante un igual supuesto:

Para hacer más elocuente este análisis intentemos averiguar que sucedería en un hecho de tránsito donde el presunto responsable sea el padre de una familia en donde parece a consecuencia del mismo su cónyuge y resulta lesionado alguno de sus hijos, según el Código Penal para el Distrito Federal

Primero. El Agente del Ministerio Público hará el levantamiento de cuerpo y enviará al lesionado a un hospital de urgencias para que sea atendido, y realizará todas la diligencias necesarias a fin de integrar la Averiguación Previa, desde luego teniendo asegurado al presunto responsable.

Segundo. El Ministerio Público le hará saber al inculpado su derecho, de obtener su libertad bajo la caución correspondiente, la cual se tabulará acorde a una tabla vigente para los delitos de homicidio y lesiones en este caso.

La cantidad fijada será depositada en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mediante un billete de depósito comprado en la Nacional Financiera, misma que se anexará al expediente y se enviará al Juez de la Causa en caso de que el Ministerio Público ejercite Acción Penal.

Desde luego se está hablando que al ocurrir el siniestro el conductor y presunto responsable no se hallaba en estado de ebriedad o bajo el influjo de otras sustancias tóxicas que le provocaren efectos similares y no haya dejado abandonadas a sus lesionados.

Tercero. Para en caso de que el presunto no reuna la cantidad suficiente para garantizar su libertad en virtud de haber solventado los gastos funerarios de su cónyuge y la atención médica prestada a su hijo, el Ministerio Público una vez teniendo por acreditados los elementos típicos del delito y por comprobada la presunta responsabilidad ejercitará Acción Penal en contra del sujeto activo, consignando el expediente a un Juez Penal conjuntamente con el detenido, quedando a disposición de éste, quien le determinará su situación jurídica en un término no mayor de 72 horas.

De considerar el Juez instructor que se encuentran reunidos y comprobados los elementos típicos del delito y la probable Responsabilidad por el que fue consignado el presunto le decretará auto de formal prisión haciéndole saber de nueva cuenta el derecho que tiene de salir bajo fianza, en virtud de que le término medio aritmético, es menor de cinco años, toda vez que la pena establecida para los delitos imprudenciales en este orden es de tres días a cinco años de prisión y suspensión hasta de dos años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio, de conformidad

con lo establecido por el artículo 60 del Código Penal para el Distrito Federal.

Sin embargo puede suceder que el sujeto activo no se encuentra en posibilidades de liquidar la cantidad fijada por los desembolsos realizados, por ello automáticamente continuaría en prisión.

Creo que la situación de la persona en este caso traerá en consecuencia graves problemas para sus demás seres queridos, y una gran desatención en su hogar, la familia y el trabajo.

Cuarto. En caso de resultar responsable, después de un largo procedimiento en el que no pudiera demostrar su inocencia, sino solo su imprudencia, que se dislumbró desde el primer instante del delito, sólo restará al Juez de la Causa imponer la pena ha que haya lugar, tomando en consideración las reglas generales de los artículos 51 y 52 del Ordenamiento Penal para el Distrito Federal.

No obstante de ser necesaria la pena para estos delitos que implica en principio un castigo al culpable, y una rehabilitación, es menester tomar en cuenta que en estos delitos de imprudencia, no figura la voluntad, ni la intención, esa capacidad de entender y querer lograr un resultado lesivo, sino la imprudencia en la que la voluntad está dirigida hacia la realización de un fin diferente.

Por lo anterior considero es irracional e inhumano castigar a una persona que por su descuido lesiona o causa la muerte a alguno de sus seres queridos. Pudiendo en otros supuestos ser o no sus parientes.

Así también resultará incongruente en virtud de que lejos de rehabilitar a un sujeto primario delincuente, al privarlo de su libertad y ponerlo en contacto con otros reos, sólo provocará que en su desesperado papel de víctima al perder no sólo a su familia, sino también su libertad y su trabajo; esto aunado con el ambiente de delincuencia que se vive en los reclusorios preventivos como penitenciarios, lo conllevarán a volverse un verdadero delincuente en potencia.

Por último sostengo que por las circunstancias que concurren en la persona del autor, el Estado no debe establecer contra tales hechos sanción alguna; toda vez que es suficiente el dolor y sufrimiento de la pena moral que le ha causado la pérdida de sus seres queridos. Resultando más perjudiciales los fines de la pena del Estado.

Ahora examinemos el mismo supuesto, pero visto a la luz de la legislación del Estado Mexiquense.

De conformidad con el Título Cuarto del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de México en cuanto a la aplicación de sanciones, y en lo relativo al capítulo I, intitulado "Reglas Generales" se contempla una Excusa Absolutoria

extraordinaria que favorece al inculpado en caso de haber cometido homicidio o lesiones con motivo del tránsito de vehículos a sus familiares, siempre y cuando viajen a bordo de un automóvil en su compañía, refiriéndose expresamente la Ley al cónyuge, a la concubina o concubinario, hijos, padres y hermanos.

Lo anterior se establece en los siguientes artículos:

Art. 59. "El Juez, al dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa, dentro de los límites establecidos en el Código para cada delito, apreciando la personalidad del inculpado, su peligrosidad, los móviles del delito los daños morales y materiales causados por el mismo, el peligro corrido por el ofendido o el propio inculpado, la calidad del primero y sus relaciones con el segundo, y las circunstancias de ejecución del hecho.

El Juez ordenará de oficio la realización de los estudios indispensables tendientes a una correcta individualización de la pena".

Acorde a lo establecido en el capítulo III del mismo Título y Cuerpo de Leyes intitulado "Casos de Culpa, Preterintención y Error", se encuentra lo siguiente:

Art. 65. "No se impondrá pena alguna a quien por culpa y con

motivo del tránsito de vehículos en que viaje en compañía de su cónyuge, concubina, hijos, padres o hermanos, ocasionen lesiones u homicidio a alguno o algunos de estos"

Nótese el enfoque dado por el Código Penal del Estado Mexiquense para los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, pues al tratarlos con un criterio moderno y con mejor técnica a la del Código Penal para el Distrito Federal, no sólo se evita al conductor la pena de no estar con sus seres queridos, sino que además no se aplicará sanción alguna. Lo cual resulta ad hoc para el caso concreto.

Sin embargo considero adolece de algunos defectos el precepto en estudio, en virtud de establecer como requisito para gozar del beneficio de esta excusa que el sujeto pasivo u ofendido, viaje a bordo de un vehículo de motor en compañía del sujeto activo. Pues con ello se limitan los alcances de la excusa en estudio, pues al quedar fuera aquellos casos en los cuales el sujeto pasivo se encuentra en el papel de peatón, tripulante o conductor de otro vehículo diferente al conducido por el sujeto activo en el supuesto anterior que se analiza.

Obviamente quedarán fuera del supuesto de la Excusa los siguientes casos: cuando el sujeto inculcado al sacar del garaje de su domicilio su coche para dirigirse a su trabajo, no se percata de que uno de sus hijos de corta edad se

encontraba debajo de su automóvil, siendo inevitable el resultado letal, de provocar la muerte de su niño.

De igual manera el hecho de que el inculpado conduciendo su automóvil y sus familiares viajando en otro vehículo, se impactará el primero con los segundos, causándoles la muerte a su esposa y a uno de sus hijos, evidentemente estos casos no se encuentran amparados por la excusa absolutoria en cuestión.

Por lo tanto considero que la Excusa antes analizada debe hacerse extensiva para los supuestos a los que se hizo alusión, en virtud de que ya se tiene el antecedente en esta Excusa Absolutoria, la cual encierra un amplio contenido de utilidad pública, toda vez que la pena del Estudio trae consigo y en forma aparejada más daños que beneficios a la sociedad.

Para terminar pienso que el Ordenamiento Punitivo para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, debe ser adicionada en su artículo 62 cuando menos en los mismos términos que el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de México, sobretodo si se trata de hechos que concurren en el área metropolitana, debiéndose unificar el criterio de la Legislación Penal para el Estado Libre y Soberano de México y la Legislación Penal para el Distrito Federal.

COMENTARIOS

En función de las excusas absolutorias, no es posible la aplicación de la pena y constituyen el factor negativo de la punibilidad, desde luego si se considera a la punibilidad como elemento esencial del delito y no de consecuencia del mismo.

El Estado no sanciona determinadas conductas por razones de justicia y equidad de acuerdo con una prudente Política Criminal, por lo que en presencia de una Excusa Absolutoria los elementos del delito permanecen inalterables, y sólo se excluye la posibilidad de punición, desde el primer momento.

Se trata de hechos determinados por la ley que sin borrar el carácter delictivo de un acto, sin suprimir la culpabilidad de su autor producen, sin embargo una excepción de la penalidad que ordinariamente corresponde a la perpetración de una infracción penal.

Por último abundaré en señalar que la Política Criminal debe ser considerada como una parte integrante de la ciencia del Derecho Penal cuyo límite es este mismo, pues ésta marcha entre la teoría y la práctica, sin tratar de subsistir a la primera mirando a la segunda, inspirando nuevos códigos y proyectos consolidando importantes conquistas para el Derecho.

CONCLUSIONES

I. Por razones de su Naturaleza Juridica los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos siempre serán culposos, en virtud de que el agente carece de intención de provocar un resultado lesivo, y por Política Criminal se les da otro tratamiento.

II. Los delitos de mayor frecuencia que obedecen al tránsito de vehículos son lesiones, homicidio y daño en propiedad ajena, los cuales pueden concurrir conjunta o separadamente.

III. Considero de gran relevancia la figura de la querrela para la persecución de los delitos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, como es en el caso de las lesiones y el daño, por el cual ésta debe plasmarse más ampliamente en el Código Penal para el Estado de México.

IV. Propongo debe extenderse el beneficio que por Política Criminal contempla el artículo 65 del Ordenamiento Punitivo para el Estado México, toda vez que se muestra limitado, porque existen otras personas que pueden figurar en este tipo delictivo como son aquellas que tienen unión muy estrecha con el activo, por lazos de amistad o gratitud.

De igual forma deben considerarse aquellos casos concretos en los cuales una persona al mover su vehículo en el interior de

su domicilio lesiona o causa la muerte a cualquier miembro de su familia.

V. De tal suerte que propongo que los beneficios de la conclusión planteada anteriormente sean implantados en el Código Penal para el Distrito Federal, en los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos en virtud de que dicho Ordenamiento no los contempla.

VI. Para prevenir los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, es necesario mantener un estricto control en la expedición y renovación de licencias y permisos para conducir, sujetando a los aspirantes a severas pruebas de manejo y funcionamiento del automóvil, así como del conocimiento de los Reglamentos Tránsito, un examen médico general, además de contar con un seguro de amplia cobertura del vehículo que se vaya a manejar. Asimismo a nivel informativo indicarles los delitos en los que se puede incurrir de no acatar las disposiciones legales.

VII. Es imprescindible educar al ser humano peatón o conductor, para lograr en él un estado de conciencia ciudadana, que le impulse al mejor cumplimiento de sus deberes con relación al tránsito de vehículos, utilizando para ello los medios masivos de comunicación, así como la orientación necesaria sobre todo en la educación secundaria que es cuando comienza la inquietud por aprender a manejar, y

por ser la etapa de formación cívica del individuo.

VIII. Considero que con el empleo de mayores sanciones no se podrá alcanzar el éxito pretendido, esto es disminuir los delitos resultado de la circulación de vehículos, siendo más efectivo aplicar primero la educación y luego una sanción moderada.

Con base en lo anteriormente expuesto considero que el legislador debe contemplar o ampliar otras figuras para las excusas absolutorias, sobre todo en los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, en virtud de los beneficios y ventajas que se requieren en un Estado moderno.

BIBLIOGRAFIA

- | | |
|----------------------------|---|
| ARILLA, BAS, Fernando | El Procedimiento Penal en México.
Editorial, Kratos. 10a. Edición.
México 1986. |
| CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl | Derecho Penal Mexicano Parte Gral
Edit. Porrúa, S. A. México, 1982. |
| CARRARA, Francesco | Programa de Derecho Criminal
Edit. De Palma, Buenos Aires 1949 |
| CARDENAS F., Raúl | Derecho Penal Mexicano, Parte
Especial.
Edit. Jus, S.A. México 1968. |
| CARNELUTTI, Francesco | Teoría General del Delito
Traducción de Víctor Conde.
Edit. Revista de Derecho Privado
Madrid, 1941. |
| CASTELLANOS TENA, Fernando | Lineamientos Elementales de
Derecho Penal.
Edit. Porrúa, S.A. 22a. edición.
México 1986. |
| CUELLO CALON, Eugenio | Derecho Penal.
Edit. Nacional, S.A. de L.R.
9a. edición. México 1961. |
| COLIN SANCHEZ, Guillermo | Derecho Mexicano de Procedimien-
tos Penales.
Edit. Porrúa, S.A. 4a. edición,
México 1987. |
| DIAZ DE LEON, Marco A. | Código Federal de Procedimientos
Penales Comentado.
Edit. Porrúa, S.A., México 1988 |
| FERNANDEZ PEREZ, Ramón | Elementos Básicos de que Medicina
Forense.
Edit. Mendez Cervantes. 5a. edic.
México 1981. |

- FRANCO GUZMAN, Ricardo El Estudio Analítico del Delito
Edit. Anales de Jurisprudencia,
México 1954.
- GARCIA RAMIREZ, Sergio Prontuario del Proceso Penal Mé-
xicano.
Edit. Porrúa, S.A. 4a. edición.
México 1985.
- GALLART Y VALENCIA, Tomás Delitos de Tránsito.
Edit. Pac. 8a. edición. Méx. 1968
- GOMEZ, Eusebio Tratado de Derecho Penal. Tomo I
y II.
De editores S.R.L., Buenos Aires
Argentina 1939.
- GONZALEZ DE LA VEGA, Fco. Derecho Penal Mexicano, Los Deli-
tos Primera Parte.
Edit. Porrúa, S.A. México 1979.
- JIMENEZ DE ASUA, Luis La Ley y el Delito, Principio de
Derecho Penal.
Edit. Sudamericana, Buenos Aires,
Argentina 1968.
- JIMENEZ HUERTA, Mariano Derecho Penal Mexicano, T. I y II
Edit. Porrúa, S.A., 5a. edición,
México 1985.
- MARTINEZ LARA, Jorge Delitos de Tránsito.
Edit. Arte y Fotografía, S.A.
México 1976.
- OSORIO Y NIETO, César A. La Averiguación Previa
Edit. Porrúa, S.A., 3a. edición
México 1985.
- PALLARES, Eduardo Prontuario de Procedimientos
Edit. Porrúa, S.A. México 1977.
- PALACIOS VARGAS, Ramón Delitos contra la Vida y la Inte-
gridad Corporal.
Edit. Trillas. 1a. edición.
México 1979.
- PAVON VASCONCELOS, Fco. Lecciones de Derecho Penal. Parte
Especial.
Edit. Porrúa, S.A. 2a edición.
México 1965.

- PAVON VASCONCELOS, Fco. Manual de Derecho Penal Mexicano, Parte General.
Edit. Porrúa, S.A., 2a. edición, México 1967.
- PORTE PETIT, Celestino Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal.
Edit. Porrúa, S.A.
- Dogmática sobre los Delitos contra la Vida y la Salud Personal.
Edit. Porrúa, S.A. 7a. edición, México 1982.
- Programa de la Parte General del Derecho Penal.
UNAM, México 1958.
- RIVERA SILVA, Manuel El Procedimiento Penal
Edit. Porrúa, S.A., 14a. edición, México 1984.
- TERRAGNI, Marco Antonio Homicidio y Lesiones Culposos
Edit. Hamurabi S.R.L. 1a. edición Buenos Aires Argentina 1979.
- VILLALOBOS, Ignacio Derecho Penal Mexicano, P. Gral.
Edit. Porrúa, S.A., 2a. edición, México 1960.

LEYES CONSULTADAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
Edit. Porrúa, S.A. México 1990.
- Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal.
Edit. Porrúa, S.A. México 1991.
- Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal
Edit. Porrúa, S.A. México 1991.
- Código Penal para el Estado Libre y Soberano de México
Edit. Cajica, S.A. Puebla, Puebla, México 1991.

Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de México.

Edit. Cajica, S.A. Puebla, Puebla, México 1991.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Editada por el Gobierno del Estado de México, Toluca Méx. 1987.

Ley de Tránsito y Transportes del Estado de México

Edit. Cajica, S.A., Puebla, Puebla 1986.

Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del Edo. de México

Edit. Cajica, S.A., Puebla, Puebla, México 1986.

Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal

Edit. Porrúa, S.A. México 1991.

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1974-1985

Edit. Francisco Barrulieta, S. de R. L., 2a. edición. México 1985.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1975, Primera Sala.

75 años de Jurisprudencia Penal,

Edit. Cárdenas, 1a. edición, México 1981.